

BOLETIN CUT



63^a Conferencia O.I.T.

40P/1035-9 1980 no especial

PRESENTACION

RESUMEN DOCUMENTO
ENVIADO A O.I.T

EL PRIMERO DE MAYO
EN CHILE

OBSERVACIONES RESPECTO A LA NUEVA
LEGISLACION SOBRE LAS ORGANIZACIONES
LABORALES Y LA NEGOCIACION COLECTIVA
IMPUESTA POR LA JUNTA MILITAR EN CHILE

QUEJAS CONTRA EL GOBIERNO
DE CHILE PRESENTADAS
ANTE LA O.I.T



PRESENTATION

RESUME DU DOCUMENT
ADRESSE AUX DELEGUES
A L'O.I.T.

LE PREMIER MAI
1980 AU CHILI

OBSERVATIONS CONCERNANT LA NOUVELLE
LEGISLATION SUR LES ORGANISATIONS
SYNDICALES ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE.
IMPOSEE PAR LA JUNTE MILITAIRE
AU CHILI.

PLAINTES PRESENTÉES
CONTRE LE GOUVERNEMENT
DU CHILI A L'O.I.T.



INTRODUCTION

SUMMARY OF DOCUMENT
ADRESSED TO THE DELEGATES TO ILO's.

THE FIRTS OF MAY
1980 IN CHILE

REMARKS ON THE NEW LEGISLATION
ABOUT TRADE UNIONS
AND COLLECTIVE BARGAIN IMPOSED
BY THE CHILEAN MILITARY JUNTA

COMPLAINTS PRESENTED BY THE
INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE
TRADE UNIONS, THE WORLD
CONFEDERATION OF LABOUR THE WORLD
FEDERATION OF TRADE UNIONS
AND SEVERAL OTHER TRADE
UNION ORGANISATIONS AGAINST THE
GOVERNMENT OF CHILE

Special. 1980

PRESENTACION

Publicamos a continuación algunos documentos y opiniones cuyo objeto es ayudar a que la causa democrática chilena se haga oír en la Conferencia Internacional del Trabajo. De su lectura se desprende un hecho claro: la dictadura de Pinochet continua violando sistemáticamente los derechos sindicales fundamentales y es falso que hayan habido algunos progresos en este plano.

Al respecto, una consideración nos parece necesaria: la dominación política y económica que la dictadura ha implementado en Chile, requiere de la dispersión, sometimiento y sumisión de los trabajadores y sus organizaciones y allí está el objetivo central del llamado "Plan Laboral". Solo si dicha dominación puede pretender estabilidad. El atropello entonces de los derechos y libertades sindicales en Chile es un hecho aislado, casual, o puramente criminal, sino que es una condición para la permanencia del régimen.

De allí la importancia de la denuncia, de allí la necesidad de comprender el fenómeno descrito para mantener y reforzar la solidaridad con Chile. Así se comprende que todo retroceso que se imponga a Pinochet en el campo laboral y sindical es un triunfo para la democracia, la paz y la libertad en Chile. Por eso llamamos a los delegados a la Conferencia a preocuparse por nuestro país y a hacer lo posible para reforzar la lucha democrática de los trabajadores chilenos.

La presencia de la CUT en el Grupo de Trabajadores;

Los acuerdos contra la dictadura en la Comisión de Aplicación de normas, Convenios y Recomendaciones;

El rechazo de los poderes de los lacayos de Pinochet;

Son objetivos que están planteados y que comprometen al movimiento sindical internacional.

COMITE EXTERIOR DE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE
CHILE

40 P. 10359

PRESENTACION

El presente es un estudio de los aspectos políticos y económicos de Chile, realizado en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. El estudio se realizó en el período comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto de 1964, en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El estudio se realizó en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. El estudio se realizó en el período comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto de 1964, en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El estudio se realizó en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. El estudio se realizó en el período comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto de 1964, en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El estudio se realizó en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América. El estudio se realizó en el período comprendido entre el mes de mayo y el mes de agosto de 1964, en el marco de un convenio de cooperación técnica suscrito entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América.

COMITE EJECUTIVO DE LA COMISION INTER-GUBERNAMENTAL DE COOPERACION TECNICA
CHILE

4-9-10-64

RESUMEN DOCUMENTO ENVIADO A O.I.T

RESUMEN DE DOCUMENTO ENTREGADO A LOS DELEGADOS A LA
66 CONFERENCIA GENERAL DE LA O.I.T.

El Estado democrático chileno ha sido destruido por el régimen militar fascista de Pinochet. En su reemplazo, la dictadura se propone establecer un conjunto de instituciones jurídicas que aseguren su estabilidad en el poder y garanticen la permanencia del modelo económico impuesto en favor de los monopolios nacionales y extranjeros.

Los primeros sectores "institucionalizados" han sido aquellos considerados estratégicos para la mantención del modelo económico. El área de las relaciones laborales constituye en este sentido la preocupación determinante de la dictadura en el cumplimiento de su proyecto.

El "Plan Laboral" puesto en vigencia, es la institucionalización de todo el sistema represivo contra los trabajadores, contra sus Derechos Humanos y sus libertades Democráticas y Sindicales, aplicado por la dictadura desde el golpe de estado para dividir, atomizar, dispersar y destruir al Movimiento Sindical Chileno. Constituye la legalización de todas las medidas de fuerza y terror contra la organización de los trabajadores practicadas durante casi 7 años, invocando el supuesto "Estado de Guerra" y aplicando los Estados de Sitio y de Emergencia.

Normalmente, la filosofía de toda legislación laboral es la de dar a los trabajadores herramientas y mecanismos para defender sus derechos. Sin embargo, el "Plan Laboral" niega a los trabajadores toda posibilidad real de defenderse ante el patrón y retrotrae las relaciones laborales a una etapa superada por decenios de luchas y progreso social.

En estas condiciones, sus normas solo han podido ser aplicadas en las relaciones laborales de los trabajadores chilenos, mediante la fuerza y el terror.

En la nueva legislación, el sindicato no es ya un instrumento de representación, defensa y lucha de los trabajadores, sino un apéndice pasivo de un esquema político, económico y social concebido para el beneficio del empresario.

Solo pueden constituirse organizaciones sindicales por empresa lo que desequilibra decisivamente cualquiera negociación colectiva en favor del patrón. Se impide a los trabajadores formar sindicatos por rama de actividad y se ha destruido toda la organización y el poder de negociación de los trabajadores agrícolas. Los trabajadores del campo han quedado sin ninguna protección.

El "Plan Laboral" es una incitación a romper la solidaridad entre los trabajadores incentivando las relaciones individuales de trabajo en desmedro de las relaciones colectivas. El sistema de negociación de los sindicatos ha sido ordenado por orden alfabético de sus razones sociales. Ello contribuye a la dispersión de los sindicatos de una misma rama, a la heterogeneidad de sus reivindicaciones e impide la solidaridad basada en la lucha por los mismos objetivos en la negociación.

Con el "Plan Laboral", el empleador ejerce la discrecionalidad absoluta sobre el empleo en la empresa. Dispone para ello de todos los mecanismos legales para despedir personal, incluyendo a la mujer en estado de gravidez, y a los dirigentes sindicales. La violación del fuero maternal está establecida en el Nuevo Código del Trabajo (D.L.2.200) y el despido de los dirigentes siempre es obtenible mediante las disposiciones del Art. 15 del D.L.2.200 relacionadas con la Seguridad Nacional.

El "Plan Laboral" es pues un conjunto de normas que defienten al empleador de cualquier acción iniciada por los trabajadores en torno a sus condiciones de trabajo y consagra el intervencionismo del Estado con un amplio dispositivo de mecanismos de represión a los trabajadores, permitiendo así el cumplimiento del objetivo confesado por el régimen: garantizar el libre desarrollo del modelo económico vigente.

El "Plan Laboral" constituye el más grave atentado contra su existencia y su perspectiva que haya conocido el Movimiento Sindical Chileno.

En los últimos meses, la represión directa contra la organización de los trabajadores ha recrudecido. En la medida que las Federaciones Nacionales de Rama puestas fuera de la ley han impuesto de hecho su supervivencia y han continuado su actividad en la defensa de sus afiliados; en que el Movimiento Sindical ha rechazado unánimemente el "Plan Laboral" y el modelo económico, político y social que lo origina. En la medida en que

los trabajadores han exigido una respuesta del gobierno respecto de los cientos de detenidos-desaparecidos, gran parte de ellos sindicalistas, y han exigido el retorno de los chilenos impedidos por el régimen de vivir en su Patria, la respuesta de la dictadura ha sido una vez más la represión brutal y directa.

Numerosos son los casos de supuestos "enfrentamientos" entre las fuerzas armadas y policiales y opositores al régimen, de que han dado cuenta en este periodo las autoridades de gobierno.

En realidad se trata de dirigentes o militantes democráticos que han perecido en la tortura o han sido friamente ejecutados en operativos minuciosamente planificados por los servicios de seguridad. Entre otros se cuentan en este periodo los casos de Daniel Acuña en la ciudad de La Serena, de los profesores Alvarez Quinteros a fines de 1979 y Salas Jahnsen en el mes de Abril pasado.

Como ya es habitual en las semanas que preceden al Primero de Mayo, la dictadura desarrolló una violenta campaña de terrorismo que atribuyó una vez más a sus opositores, con el fin de justificar ante la opinión pública la represión contra el movimiento sindical y su programa de celebración.

Este año, el despliegue represivo realizado alcanzó gran envergadura. El gobierno anunció en los primeros días de abril que ningún acto de celebración del Día Internacional del Trabajo sería autorizado y que la única manifestación al respecto sería la que el mismo gobierno organiza cada año. Al mismo tiempo desató operaciones rastrollo con detenciones masivas en los barrios populares de Santiago; hizo arrestar y flegelar a la totalidad de la dirección de la Confederación Unidad Obrero-Campesina y de otras Federaciones, encarceló a dirigentes juveniles tales como Jaime Cuevas y José Hidalgo, hizo gran despliegue militar por las calles de Santiago y sobrevolar helicópteros sobre los barrios populares a fin de amedrentar a la población.

En los días anteriores al Primero de Mayo, los 5 principales dirigentes de la Federación de Sindicatos Metalúrgicos fueron arrestados, incoando el gobierno un proceso en su contra. Además, dos periodistas de publicaciones democráticas, Jorge Sosa y José Maldavski se encuentran desaparecidos según lo denunciara el Colegio de Periodistas, a petición de sus familiares, luego de haber sido detenidos por funcionarios de seguridad del régimen,

El día Primero de Mayo, las fuerzas represivas arrestaron a más de 500 personas, entre las cuales 7 dirigentes de la Federación CGIL-CISL-UIL de Italia que asistían a las celebraciones programadas por el Movimiento Sindical Chileno. De las personas arrestadas antes del Primero de Mayo, 17 fueron relegadas a lugares inhóspitos de los extremos del país, y 37 de los detenidos con posterioridad a él. Los restantes detenidos fueron sometidos a malos tratos y humillaciones en los lugares de detención. Incluso, varios obispos y altos dignatarios de la Iglesia Católica.

En los últimos días de este mes, el gobierno militar se querelló ante los tribunales de justicia contra el Presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Carlos Frez y el Secretario General del Comando Nacional de Defensa de los Derechos Sindicales, Manuel Jimenez, por representar organizaciones que no poseen personería jurídica, en circunstancias que es la propia legislación impuesta arbitrariamente por la dictadura la que impide que estas y otras organizaciones sindicales cumplan con tal requisito. Por tanto, se trata simplemente de una nueva acción represiva destinada a impedir la expresión de las organizaciones sindicales, que según la querrela planteada por la Junta Militar, afecta no solo a los dirigentes del FUT y del Comando, sino a todos aquellos que sean acusados de ser culpables o responsables del delito de integrar y representar a esas organizaciones.

El 29 de Mayo las fuerzas represivas impidieron la realización de un acto de solidaridad con las personas afectadas por la represión, pretextando que no se había solicitado autorización a las autoridades militares. Esta actitud de la dictadura es absolutamente arbitraria por cuanto el acto se realizaba en un local de la Iglesia Católica y de acuerdo a la legislación dictada por el Gobierno. En tal caso no se requiere permiso previo. El acto fue convocado por la Coordinadora Nacional Sindical, el Comité de Familiares de los Confinados, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Sindicato de Abogados, las organizaciones médicas de Chile y organizaciones de pobladores de Santiago.

SEÑORES DELEGADOS:

La legislación laboral promulgada por la dictadura no permite el ejercicio efectivo de los Derechos y Libertades Sindicales. Ella vulnera las disposiciones de los Convenios Nos 87 y 98 y hace caso omiso de las resoluciones de las 59a. y 60a. Conferencias de la OIT.

Esta legislación ha sido impuesta por la fuerza a los trabajadores los cuales la han rechazado unánimemente convirtiendo su derogación en una de sus principales reivindicaciones. En estas condiciones, la vigencia del Plan Laboral constituye la más grave amenaza contra la existencia misma de un movimiento sindical democrático, independiente y poderoso.

La represión continua y se intensifica, con el fin de imponer a los trabajadores el "Plan Laboral" e impedir que su organización se desarrolle como la más importante expresión democrática del país.

En estas condiciones, la delegación de la dictadura a la presente Conferencia, carece de toda representatividad tanto desde el punto de vista de su generación, como de la calidad de sus integrantes, quienes tienen como único atributo para componerla, su incondicionalidad al régimen.

Por estas razones es que les solicitamos contribuir a la adopción de las siguientes medidas:

1. Rechazar los poderes de los delegados designados por la Junta en representación de los trabajadores chilenos.
2. Exigir a través del Consejo de Administración de OIT a la dictadura la derogación de los Decretos que conforman el "Plan Laboral" y el D.L.3.168 y la dictación de una legislación laboral que se ciña estrictamente a los preceptos de los convenios y recomendaciones de esta organización internacional.
3. Incorporar a la queja No 823 del Movimiento Sindical Internacional contra la dictadura Militar fascista las nuevas violaciones de los derechos y libertades sindicales denunciados y exigir a la Junta el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones sobre dichos derechos y libertades aprobados por OIT.

COMITE EXTERIOR DE LA CENTRAL UNICA DE TRABAJADORES DE
CHILE

EL PRIMERO DE MAYO EN CHILE

En los días previos al 1º de Mayo, 517 personas habían sido arrestadas en medio de los operativos efectuados con enorme despliegue de efectivos policiales armados de metralletas, con numerosos vehículos e incluso con helicópteros.

El Primero de Mayo transcurrió con acuartelamiento en primer grado de todas las ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) con toque de queda, cadena de emisoras obligatoria y con declaratoria de feriado para el día 2 de mayo. Para muchos observadores el clima recordaba al de los días que siguieron al golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

El 1º de Mayo mismo fueron detenidas por lo menos 52 personas más en Santiago. Una treintena en las cercanías del sindicato IRT en Vicuña Mackenna, en donde se realizó un combativo acto llamado por el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) y 20 cerca de la Estación Central, en donde estudiantes, obreros, pobladores y dueñas de casas hicieron un mitin en la calle, siendo reprimidos brutalmente por carabineros.

Agentes de la CNI (Central Nacional de Inteligencia) vejaron a Monseñor Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago y 4 vicarios de Santiago. Cuatro funcionarios de la CNI detuvieron el auto de propiedad del obispado en que viajaban los religiosos y los sometieron a vejámenes colocándolos contra un muro, bajo amenaza de las armas y procedieron a registrar minuciosamente el auto en búsqueda de armas. Después, el obispo auxiliar, Cristian Prest de la Vicaría Oriente, Alfonso Baeza de la Pastoral Obrera, Miguel Ortega de la Pastoral Juvenil y Fernando Tapia de la Vicaría Oeste, fueron sometidos a un humillante registro personal. Este hecho tuvo lugar en momentos en que los prelados concurrían al acto de celebración del Primero de Mayo convocado por la Coordinadora Nacional Sindical en el Sindicato Panal.

El Ministerio del Interior prohibió un acto público solidificado por el Comando de Defensa de los Derechos Sindicales, que preside Eduardo Ríos, con el objeto de celebrar el Día del Trabajo. El jefe de la Guarnición de Santiago, General Humberto Gordon, en carta enviada a ese Comando, reiteró la negativa para el acto en la Plaza Pedro Aguirre Cerda, pero otorgó permiso "siempre y cuando la reunión proyectada se realice dentro de la sede de los respectivos sindicatos o sedes gremiales".

En vísperas de la celebración del 1º de Mayo y en perfecta sincronización con la represión desatada fueron detenidos Ricardo Lecaros, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos y Rolando Olivares, todos dirigentes de la referida Federación.

Las detenciones obedecen a un proceso iniciado por una querrela interpuesta por el Ministerio del Interior fundamentada en el decreto 2346 de 17 de octubre de 1978, que disolvió 6 federaciones nacionales y un sindicato provincial, entre ellos la Federación Nacional de Sindicatos Metalúrgicos.

En la sede del Sindicato Panal, calle Yungay, se realizó el mitin de celebración del Primero de Mayo convocado por la Coordinadora Nacional Sindical y al que asistieron más de 2000 personas. El Presidente de la CNS, Manuel Bustos, llamó a instaurar un gobierno que respete al trabajador y dijo que esto solo lo podría lograr la unidad de los trabajadores. Bustos dijo que bajo el actual régimen sus derechos sindicales han sido conculcados y dirigiéndose a las FF.AA. agregó "los trabajadores chilenos creemos sinceramente que han equivocado la compañía, apareciendo como avales de intereses ajenos a nuestra realidad y a nuestros sentimientos. Como patriotas queremos con vehemencia que el legado de las FF.AA. sea un Chile libre y democrático, no un país corporativo, fascista o de capitalismo individualista en que primen el odio y el resentimiento". El orador subrayó que la perpetuación de un régimen escudado en las metas sin plazos lleva a Chile indefectiblemente al caos, confusión, violencia e injusticia, con un agravante que las FF.AA. tendrán una imagen de compromiso con los grupos nazi-fascistas". Terminó diciendo que "los chilenos queremos un Chile libre, un Chile Justo, un Chile Democrático".

En el acto de la CNS estuvieron presentes delegaciones de Canadá, Holanda, Italia, España, además de una representación de la CIOSL y la FSM.

Carabineros dispararon sus armas al aire y cargaron violentamente contra centenares de trabajadores que salieron a la calle en la Avenida Vicuña Mackenna al finalizar el acto realizado en el Sindicato IRT y que había sido llamado por el

FUT. Se sabe de una treintena de detenidos en ese lugar. En el acto, al que acudió el Vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza, en representación del Cardenal, los oradores denunciaron la grave situación de explotación y privación de derechos que vive actualmente la clase trabajadora chilena. El dirigente sindical mexicano Victor Manuel Duran de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores -CLAT- y de la Confederación Mundial del Trabajo entregó un mensaje de solidaridad con el movimiento sindical chileno.

El antiguo dirigente sindical y fundador de la CUT, Clotario Blest fue detenido en su domicilio por efectivos policiales que durante varias horas le impidieron salir a la calle.

Dos dirigentes juveniles y un dirigente sindical fueron detenidos en la población Américo Vespucio.

En un mensaje a los trabajadores, transmitido por Radio Chilena, el Cardenal Arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, advirtió con profunda preocupación que las diferencias se han hecho demasiado grandes entre los ricos y los pobres, hasta el extremo de que en Chile existen dos sociedades; una desarrollada y pudiente y otra subdesarrollada en la que no se dispone ni de lo más indispensable. Dijo el Cardenal que esta realidad crea inevitablemente antagonismos y un clima de violencia, que es una realidad que viene de hace muchos años, como es también antiguo el reclamo de justicia social, pero que la situación se agrava cuando además existe falta de consideración por la persona humana.

Durante la reunión llamada por la Coordinadora Nacional Sindical Angelo Reginni, dirigente sindical italiano, que presidía una delegación de 12 dirigentes sindicales de su país, relató que los vejámenes a que fueron sometidos siete miembros de la delegación. En su denuncia Reginni dijo que durante la madrugada del día 30 de abril agentes de la CNI allanaron el hotel Forestal donde se hospedaban Aluisi Nava, Domenico Bartelli, Marco Calamai, Giovanni Pedretti, Franco Savati, Giovanni Ricci y Luciano Sandrini, fueron detenidos durante dos horas y media en la Cuarta Comisaría de Santiago donde se les sometió a interrogatorios y se les destruyó su material fotográfico. El encargado de negocios de Italia ante el gobierno militar chileno, Sr. Tomaso de Bergotini, intervino ante las autoridades militares para obtener su libertad.

OBSERVACIONES RESPECTO A LA NUEVA LEGISLACION SOBRE LAS ORGANIZACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACION COLECTIVA IMPUESTA POR LA JUNTA MILITAR EN CHILE

Primero: Se ha excluido de la negociación colectiva a los trabajadores de las instituciones de la administración del Estado, centralizados y descentralizados, del Poder Judicial, de las empresas e instituciones públicas o privadas, cuyos presupuestos hayan sido financiados en más de un 50% por el Estado, directamente, o a través de derechos o impuestos; a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje (con lo cual se ejerce una brutal explotación a menores de edad), a los trabajadores contratados para una obra o faena determinada (afecta especialmente a los obreros y empleados de la construcción), a los trabajadores que se desempeñan como vigilantes y a los supervisores.

Segundo: Se prohíbe ejercer el derecho de huelga a los trabajadores de los servicios y empresas de utilidad pública, así como a los especificados en el punto anterior, y además a los trabajadores "cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, a la economía del país o a la seguridad nacional", calificando la causa exclusiva y unilateralmente la autoridad de gobierno, cuya determinación es inapelable.

Tercero: Se suprime de la negociación colectiva que los trabajadores puedan proponer acuerdos sobre uso de la mano de obra, sistemas de promociones, ritmos de producción, uso de las maquinarias; que se puedan fijar remuneraciones para los trabajadores que no pertenecen al sindicato o grupo negociador; se niega la posibilidad que se pueda pactar aportes patronales, directos o indirectos, a los organismos sindicales.

Cuarto: Se impide que se puedan pactar mejoramientos generales de carácter social, tales como salud, vivienda, educación o recreación.

Quinto: Se impide que los sindicatos de una misma rama de la producción, de servicio o comercio puedan negociar conjuntamente sus demandas económicas y sociales. Igualmente se niega el derecho a que las federaciones y confederaciones de trabajadores puedan negociar con las organizaciones empresariales similares o con los empleadores públicos. Sin embargo, las confederaciones y federaciones empresariales puedan formular peticiones al Estado y a las entidades crediticias, monetarias o financieras.

Sexto: Se elimina a los beneficios de contrato colectivo a los trabajadores que no participen en la negociación o ingresen a la empresa con posterioridad a la suscripción del contrato colectivo.

Séptimo: En la práctica el derecho de huelga es una ficción, pues se establece un límite de duración de la misma de 60 días, al cabo de la cual el trabajador o se reincorpora en las mismas condiciones que tenía en el convenio anterior o se considera "voluntariamente" renunciado, perdiendo todos los beneficios establecidos y sólo tiene derecho a percibir subsidio de cesantía.

Se autoriza asimismo que un 20% de los trabajadores en conflicto puedan convocar a asamblea sindical y censurar la comisión negociadora. Igualmente se autoriza para que el trabajador después del treintaavo día de huelga pueda reintegrarse a su trabajo, independientemente del sindicato o del grupo negociador.

Se establece además, que una vez iniciada la huelga queda automáticamente suspendido el contrato de trabajo y el pago de todos los beneficios o regalías del contrato de trabajo. La totalidad de las imposiciones previsionales pasan a ser de cargo de los trabajadores, incluida la parte que le corresponde cancelar al empleador.

Se establece que una vez iniciada la huelga respecto de aquellos trabajadores que continuaron laborando, sea porque no participan en la negociación o porque no están afiliados al sindicato en conflicto, el empleador dentro de los primeros 30 días desde esa fecha, puede declarar el lock out o cierre patronal y en ese caso solamente pagaría las imposiciones respecto de dichos trabajadores, perdiendo en consecuencia las remuneraciones y los beneficios contemplados en su contrato de trabajo.

Se autoriza al empleador, mientras subsista la huelga, para que contrate el personal que estime conveniente para el funcionamiento de la empresa.

Octavo: Se determina que los sindicatos o trabajadores que no presenten sus proyectos de contrato colectivo en la fecha determinada por el gobierno, están impedidos de hacerlo hasta un año después, con lo cual se atenta en contra de los ingresos remuneracionales y los beneficios sociales de los trabajadores.

Noveno: Se establece que en las empresas en que no existe convenio colectivo anterior, los trabajadores sólo podrán ejercer el derecho de negociación si el empleador considera apta la época para ello.

Décimo: Las conquistas o beneficios alcanzados en el convenio anterior al que se negocia, no tendrán validez si no se especifican explícitamente una por una en el nuevo contrato colectivo. Tal disposición ha significado que se vulneren o se rebajen beneficios otorgados o simplemente que se deba discutir cada conquista alcanzada, dándole así un margen de abierta y clara ventaja a la parte patronal en la negociación colectiva. Los beneficios alcanzados y otorgados están en tela de juicio en cada negociación y si el patrón lo desconoce no constituyen un derecho adquirido.

Décimo Primero: Se atenta contra el ejercicio de dirigente sindical al establecerse la disposición que cuando una asamblea censura a uno de los dirigentes está censurando automáticamente al conjunto del directorio sindical. Tal disposición está destinada a torpedear y compliar la actividad regular del sindicato y a restarle continuidad a su acción y funcionamiento.

Décimo Segundo: Un trabajador no podrá ser electo dirigente sindical si está procesado por simple delito, sin especificar su alcance, u sin que medie condena del tribunal. Igualmente no podrá ser electo si está afecto a inhabilidades o incompatibilidades que establezca la Constitución Política del Estado o las leyes del país, y tal como lo señaláramos con ocasión de la 65a. Conferencia General de la OIT, el proyecto constitucional del gobierno de Chile establece graves discriminaciones políticas e ideológicas para el ejercicio de los derechos cívicos válidas para el ejercicio de la función de dirigente sindical.

Décimo tercero: Se limita a 16 horas mensuales o 4 semanales el tiempo destinado al ejercicio de la función de dirigente sindical, con el agravante que el pago del salario, imposiciones previsionales y otros beneficios serán de cargo del sindicato.

Décimo cuarto: Se suprime el derecho que tenían los sindicatos industriales a recibir del trabajador su cotización sindical por el solo hecho de ingresar a la empresa. Dicha disposición lesiona el financiamiento normal del sindicato.

Se elimina además el aporte del 3% anual por concepto de utilidades que debía entregar el empleador al sindicato.

Décimo quinto: Se facilita gravemente la discriminación salarial al facultársele al empleador para que pueda contratar personal en calidad de aprendiz con una remuneración del 75% del ingreso mínimo, hasta por dos años.

Décimo sexto: Se ha suprimido la ley 16.625 sobre sindicalización campesina, suprimiendo con ello normas expeditas y modernas de organización de los trabajadores del agro, establecidas desde 1967 en una ley sancionada mayoritariamente por el Congreso (Parlamento) Nacional.

Décimo séptimo: Se ha suprimido el Estatuto de los Trabajadores del Cobre, instrumento legal que establecía importantes derechos sindicales y eficaces normas de negociación colectiva entre empresas y sindicatos de la Gran Minería del Cobre de Chile.

Décimo octavo: Han quedado sin efecto los sistemas de tarifados nacionales que regían para los trabajadores de diversas actividades: Construcción, Marítimos, Textil, Gráficos, etc., eliminando de este modo importantes beneficios y conquistas establecidas desde largos años y dejando en la indefensión a miles de trabajadores de esos sectores.

IV. CASOS EN LOS QUE EL COMITE FORMULA
CONCLUSIONES PROVISIONALES

CASO No 823

QUEJAS CONTRA EL GOBIERNO DE CHILE PRESENTADAS ANTE LA O.I.T

289. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de noviembre de 1979, en cuya ocasión presentó un informe provisional al Consejo de Administración.

290. Poco antes y también después de este último examen del asunto, el Comité ha recibido nuevas comunicaciones de las organizaciones querellantes siguientes: Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) (15 de Octubre de 1979), Unión Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Agricultura, de los Bosques y de las Plantaciones (UISTAPP) (6 de Noviembre de 1979 y 16 de Abril de 1980), Federación Sindical Mundial (FSM) (13 de Diciembre de 1979 y 11 y 14 de Abril de 1980), Unión Internacional de Trabajadores del Textil, Vestido, Cuero y Piel (13 de Diciembre de 1979 y 14 de febrero de 1980), Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) (14 de diciembre de 1979 y 17 de Abril de 1980), Unión Internacional de los Sindicatos Mineros (UISM) (17 de diciembre de 1979), Federación Internacional Sindical de la Enseñanza (FISE) (17 de diciembre de 1979), Unión Internacional de Sindicatos de los Transportes (UIST) (20 diciembre de 1979), Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (20 de diciembre de 1979, 7 y 17 de Enero, 14 y 18 de Marzo, 15, 22 y 23 de Abril y 9 y 12 de Mayo de 1980).

291. Chile no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni tampoco el Convenio Sobre el derecho de sindicación y de negociación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. NUEVA LEGISLACION SOBRE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES
Y LA NEGOCIACION COLECTIVA

292. El Gobierno ha promulgado el 29 de Junio de 1979 varios decretos-ley en materia de derechos sindicales y de negociación colectiva, en particular los decretos-leyes núms. 2756 y 2758, de los cuales el comité ha tomado nota en su reunión de noviembre de 1979. El Comité había formulado comentarios sobre los textos mencionados, en particular, acerca de los siguientes puntos: constitución de sindicatos, adquisición de la personalidad jurídica, estatutos sindicales, condiciones de elegibilidad de los dirigentes, inspección de la contabilidad de los sindicatos, prohibición de intervenir en las actividades políticas de partidos, constitución de federaciones y confederaciones, derecho sindical de los funcionarios, campo de aplicación y nivel de la negociación colectiva, derecho de huelga.

293. En estas condiciones, el Consejo de Administración, por recomendación del Comité, había:

- i) tomado nota con satisfacción de la abrogación del decreto-ley núm. 198, adoptado en diciembre de 1973 y que imponía graves restricciones a las actividades sindicales;
- ii) comprobado que la promulgación de los decretos-leyes sobre las organizaciones sindicales y la negociación colectiva constituía un primer paso importante en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación y de Conciliación.
- iii) señalado a la atención del gobierno los principios y consideraciones expuestos por el Comité acerca de ciertas disposiciones de la nueva legislación que son incompatibles con los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva, a fin de que se introdujesen las enmiendas que fuesen necesarias.
- iv) expresado la esperanza de que la legislación sería aplicada con un espíritu conforme a los principios de la libertad sindical y del respeto de los derechos civiles, cuya importancia fuera subrayada por la Comisión de Investigación y de Conciliación.

- v) pedido al gobierno que suministrase informaciones sobre la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en el apartado iii) anterior, y continuase suministrando informaciones sobre la aplicación de los decretos-leyes en la práctica.

294. En su comunicación del 20 de febrero de 1980, el Gobierno señala ciertas modificaciones técnicas de la legislación sobre las organizaciones sindicales y la negociación colectiva, introducidas mediante el decreto-ley núm. 2950, publicado en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1979. Entre las modificaciones aportadas al decreto-ley núm. 2758 sobre la negociación colectiva, figura la introducción de aclaraciones del concepto de materias susceptibles de negociación colectiva; la entrega a las directivas sindicales del poder de negociación; la eliminación de la exigencia de obtener la personalidad jurídica para administrar fondos sociales. Además, durante el primer año de vigencia del decreto-ley, se permite negociar a todos los sindicatos existentes con anterioridad a la promulgación de éste, incluso cuando el número de sus afiliados y el porcentaje que representen en el total de la respectiva empresa fueren inferiores a los requeridos por la ley. Se han hecho igualmente modificaciones en la determinación del porcentaje mínimo de trabajadores necesario para poder negociar colectivamente. Este porcentaje se calcula ahora en relación con el total de trabajadores que pueden ser objeto de negociación y no en relación con el total de asalariados de la empresa,

295. El Gobierno, tanto en su comunicación del 20 de febrero de 1980 como en la del 22 de Abril de 1980, suministra diversas informaciones estadísticas acerca de los convenios colectivos concluidos; huelgas declaradas y organizaciones sindicales constituidas. De estas informaciones se desprende que entre el 16 de agosto de 1979 y el 31 de marzo de 1980, los trabajadores han presentado 1931 proyectos de contratos colectivos y que fueron firmados 1753 nuevos contratos colectivos. Desde el 1º de Octubre de 1979 al 31 de Marzo de 1980, se registraron 54 huelgas que afectaron a más de 20.000 trabajadores con una duración media de 17 días. El único caso de arbitraje obligatorio se produjo en la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA). Durante los últimos nueve meses, se han constituido más de 400 sindicatos y una confederación que agrupa 18 sindicatos y dos federaciones.

296. En su comunicación del 19 de mayo de 1980, el gobierno señala que el 1º de Mayo fue promulgado el decreto-ley núm. 3355, por el que se introducen algunas modificaciones a la legislación laboral. Se trata, principalmente, de ajustes técnicos a la ley de asociaciones gremiales. El gobierno menciona a este respecto, en particular, las disposiciones relativas a las cuotas extraordinarias que pueden ser descontadas de las remuneraciones, las facilidades acordadas a los dirigentes sindicales, la ampliación del derecho de sindicación en la agricultura, los delegados del personal, la negociación colectiva y las asociaciones gremiales.

297. El Gobierno indica,asimismo,que se han adoptado medidas en materia de constitución y fiscalización de sindicatos con objeto de atenuar el papel primitivamente asignado a los órganos administrativos del Estado. En efecto,existe ahora la posibilidad de que el sindicato reclame ante los Tribunales de Justicia por vicios de constitución que haya observado la Inspección del Trabajo. Además,se limitan los poderes de la Dirección del Trabajo en materia de fiscalización de las organizaciones sindicales. De esta manera la Dirección del Trabajo no tiene la posibilidad de congelar cuentas corrientes y en caso de irregularidades constitutivas de delito,dicho servicio debe hacer la correspondiente denuncia a la justicia del Crimen.

298. El Comité toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno acerca de la aplicación de la nueva legislación así como de las enmiendas introducidas a los decretos-leyes promulgados en junio de 1979. Advierte con interés,en particular,que ciertas enmiendas introducen la posibilidad de recurso judicial contra decisiones administrativas en materia de constitución de sindicatos. Sin embargo,el Comité lamenta que no se hayan enmendado todavía la mayor parte de las disposiciones relativas a los puntos mencionados en el párrafo 292 supra sobre las que han formulado comentarios cuando examinó la legislación. Expresa la firme esperanza de que en breve plazo se introducirán las modificaciones necesarias,a la luz de los principios de la libertad sindical y de las recomendaciones formuladas por el Comité. Por otra parte,el Comité,pide al Gobierno que le mantenga informado de toda evolución en esta materia.

B. DESTITUCION DE UN DIRIGENTE SINDICAL

299. En reuniones anteriores,el Comité habia examinado alegatos relativos a la destitución pronunciada el 8 de marzo de 1979 contra Daniel Lillo,Presidente de la Asociación Nacional de Empleados de Aduana de Valparaiso. Esta medida habia sido tomada por el Intendente de Valparaiso,conforme al decreto-ley núm.349 de 1974. Este Decreto-ley autoriza a los intendentes y gobernadores a pedir su renuncia a los miembros de comisiones directivas de ciertos tipos de asociaciones,en particular, de organizaciones de trabajadores del sector publico,fundándose en motivos graves que impidan el funcionamiento de la organización y a nombrarles reemplazantes. Si el interesado no presentare su renuncia en el plazo fijado,el Intendente o gobernador dicta una resolución,destituyéndole de su cargo de dirigente de la organización. En el caso presente,el Sr.Lillo habia, según el Gobierno,dado a la prensa una falsa versión de una reunión a la cual el Sr.Lillo habia asistido. Más tarde,el Gobierno indicó que el Sr.Lillo habia sido objeto de una medida de suspensión temporal de su empleo.

300. En su reunión de noviembre de 1979, el Consejo de Administración, por recomendación del Comité, señaló a la atención del Gobierno ciertos principios sobre la importancia de la protección contra actos de discriminación antisindical y le rogó que indicase si el decreto-ley núm. 349 había sido derogado en lo que concierne a las organizaciones de trabajadores del sector público.

301. En su comunicación del 16 de mayo de 1980, el Gobierno indica que diversos órganos gubernamentales estudian actualmente la reforma del estatuto de los funcionarios públicos. La nueva legislación, que establecerá el régimen definitivo de asociación de los agentes del Estado, reemplazará las normas provisionales contenidas en el decreto ley núm. 349. Añade el gobierno que su filosofía se opone a la injerencia de las autoridades en las asociaciones y que tiene por objeto reafirmar su libertad y autonomía.

302. De las informaciones suministradas por el Gobierno parece deducirse que sigue vigente el decreto-ley núm. 349, en el que se basó la destitución de Daniel Lillo. Por consiguiente, el Comité debe recordar que las disposiciones del decreto ley que permiten la destitución de los dirigentes de las asociaciones de trabajadores del sector público por las autoridades administrativas, no son conformes con los principios de la libertad sindical; debe instar por que se deroguen estas disposiciones. El comité también confía que la legislación relativa a las asociaciones de funcionarios actualmente en estudio derogará las disposiciones mencionadas y que, de manera más general, otorgará el derecho sindical a los funcionarios públicos.

C. DISOLUCION DE ORGANIZACIONES SINDICALES

a) Organizaciones disueltas en octubre de 1978.

303. Se han formulado igualmente alegatos relativos a la disolución por el Gobierno de siete organizaciones sindicales en octubre de 1978. Según el gobierno, la conducta de las organizaciones disueltas revelaba que sus medios de acción y sus objetivos coincidían con los principios y los fines de la doctrina marxista. Las organizaciones en cuestión habían presentado un recurso constitucional de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, quien las había rechazado en primera instancia. Esta decisión había sido confirmada por razones de procedimiento en una resolución tomada por la Corte Suprema acerca de cuatro de estas organizaciones. El asunto concerniente a las otras tres organizaciones continuaba en instancia. En su reunión de noviembre de 1979, el Consejo de Administración, por recomendación del Comité, rogó al gobierno que enviara informaciones sobre los resultados de los recursos aún en instancia.

304. En su comunicación de 22 de Abril de 1980, el Gobierno declara que la Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado la demanda interpuesta por la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina. La Corte Suprema confirmó en dicha decisión por razones de procedimiento. El Gobierno añade que no se han designado aún los beneficiarios de la devolución de los bienes de esta organización. Sin embargo, este patrimonio se encuentra bajo la tuición del Estado, a través del Ministerio de Tierras y Colonización. Precisa el Gobierno que las personas que eran miembros de esta organización gozan de entera libertad para constituir las organizaciones que deseen. El gobierno indica, por último, que sigue pendiente el recurso interpuesto por la Federación Nacional Textil y del Vestido.

305. El Comité nota que por razones de procedimiento la Corte Suprema ha rechazado la demanda interpuesta por la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina. En estas condiciones, el Comité no puede sino comprobar que el procedimiento seguido en el presente caso para la disolución de las siete organizaciones mencionadas no está de acuerdo con el principio según el cual las organizaciones de trabajadores no deben ser disueltas por vía administrativa. A este respecto, el Comité observa, como ya lo hizo en su informe anterior sobre este caso que la nueva legislación sindical (decreto ley núm. 2756, art. 54) dispone que la disolución de sindicatos se efectúe por vía judicial. En lo que concierne a los bienes de las organizaciones disueltas, el comité estima que, en definitiva, deberían ser repartidos entre los miembros de las organizaciones o transferidos a las organizaciones sucesoras.

b) Nuevos alegatos

306. En un documento del Comité Exterior de la Central Unica de Trabajadores de Chile, anexo a las comunicaciones de la FSM y de la CIOSL de fechas 11 y 23 de abril de 1980, se indica que la Corte Suprema ha pronunciado la disolución del sindicato del Club de la Union de Santiago por el motivo de que un sindicato no puede existir en una institución que no persigue fines de lucro. El Gobierno no ha enviado aún sus observaciones sobre este alegato.

D. DESPIDO DE SINDICALISTAS

307. En su comunicación del 17 de enero de 1980, la CIOSL se refiere a violaciones de los derechos sindicales que habrían sido perpetradas por las autoridades chilenas contra cuatro trabajadores de la Compañía Chilena del Cobre (CODELCO), división de El Teniente. La CIOSL une en anexo a su comunicación una carta del Comando Nacional de Defensa de los Derechos Sindicales.

308. Se indica en esta comunicación que cuatro trabajadores de la empresa CODELCO, división de El Teniente, fueron elegidos miembros de la Comisión de Cuentas del Sindicato Industrial de Rancagua. Esta elección tuvo lugar a raíz de una censura presentada contra la antigua comisión culpable, con la dirección sindical actual, de malversación de fondos sindicales.

309. La comunicación precisa que la nueva comisión ha llevado a bien un trabajo detallado, que ha permitido descubrir maniobras ilegales de la dirección sindical, con el acuerdo, la colusión o la indiferencia de los órganos del Estado.

310. Se añade en la comunicación que la dirección sindical actual ha obstaculizado las acciones de la Comisión Revisora de Cuentas, cuando ésta es la única responsable de la gestión legal y antiestatutaria de los fondos. La complicidad de funcionarios del Estado se explica, según la comunicación, por razones de orden político. En efecto, se añade que los dirigentes sindicales responsables de la situación son favorables al Gobierno y éste último les protege. A pesar de las presiones y amenazas, los miembros de la comisión revisora continuaron sus pesquisas.

311. Esto provocó reacciones del Gobierno y de la empresa pública CODELCO, quien despidió, el 2 de octubre de 1979 a los cuatro miembros de la comisión. La empresa se basó para tomar estas medidas, en el punto 10 de la ley núm. 16.455, que trata de los despidos por necesidades ligadas al funcionamiento de la empresa, al establecimiento o al servicio. La dirección de la empresa responde a los pedidos de explicación, que se trataba de "órdenes superiores". De esta manera, prosigue la comunicación, el Gobierno de Chile, actuando en tanto que autoridad pública y en tanto que empleador, ha intervenido con perjuicio de los miembros del sindicato y se ha injerido en asuntos puramente sindicales.

312. La documentación dirigida por la FSM y la CIOSL el 11 y 23 de abril de 1980 menciona igualmente las medidas de despido pronunciadas contra dirigentes de diversas organizaciones sindicales: el Sindicato Industrial del Mineral de Cobre de Chuquicamata, la Asociación de Correos y Telégrafos de Concepción y el Sindicato de los Trabajadores de Textil "Andina". Por otro lado, 52 trabajadores de la empresa C.T.I. habrían sido despedidos como represalia por la huelga legal de 17 días que realizaron en diciembre de 1979.

313. En su comunicación del 22 de abril de 1980, el gobierno se refiere al despido de los trabajadores que habrían sido elegidos miembros de la Comisión Revisora de Cuentas del Sindicato Industrial de Rancagua (CODELCO), División El Teniente. El gobierno explica que estas personas presentaron su candidatura a dicha Comisión en una asamblea del sindicato, que tuvo lugar

el 20 de marzo de 1979. No obstante, no existe constancia alguna de su elección en el libro de actas de esta asamblea. Sin embargo, de hecho, asumieron tales funciones y pidieron a la Dirección del Trabajo una revisión contable del Sindicato. En definitiva, y con motivo de una denuncia contra el sindicato, la Dirección del Trabajo transmitió los antecedentes al Juzgado del Crimen correspondiente. Por otro lado, los trabajadores afectados sometieron el asunto del despido a los tribunales de justicia, los cuales no han dictado aún sentencia alguna,

314. De manera general, a causa del número elevado de alegatos relativos a despido de sindicalistas, el Comité considera ya útil recordar la importancia que atribuye a una protección eficaz contra los actos de discriminación antisindical. Observa que los despidos efectuados en la empresa CODELCO, División El Teniente, son objeto de procedimientos judiciales y, por consiguiente, desearía se le mantuviera informado del curso que sigan. El Comité desearía también obtener las observaciones del Gobierno acerca de los nuevos alegatos de despidos antes mencionados.

E. LIBERTADES CIVILES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SINDICALES

315. En las diversas etapas del examen del caso, el Comité ha examinado alegatos relativos a la detención y a la desaparición de sindicalistas o de antiguos sindicalistas. En un informe examinado por el Comité, en noviembre de 1968, el Gobierno había enviado informaciones sobre 24 de las 67 personas mencionadas en la lista establecida por el Comité en su 177º informe. En marzo de 1979, el gobierno señaló que la Corte de Apelaciones de Santiago había designado en misión extraordinaria a uno de sus magistrados para investigar los asuntos relativos a personas presuntamente desaparecidas cuyos casos estaban en instancia ante los tribunales competentes. Estos asuntos concernían a 36 personas citadas en las quejas.

316. En una comunicación de octubre de 1979, la CIOSL declaraba que 18 cadáveres presentando signos de tortura habían sido descubiertos en los alrededores del cementerio de Yumbel. Según las declaraciones de los habitantes de esta región, los cadáveres habían sido enterrados a finales de octubre de 1975. Se había observado en aquella época en los alrededores un gran despliegue de fuerzas militares y de carabineros. La CIOSL precisaba que los cadáveres de dos dirigentes sindicales de la industria de papel de Laja habían sido identificados.

317. En su reunión de noviembre de 1979, el Consejo de Administración, por recomendación del Comité, rogó al Gobierno que continuara enviando informaciones sobre el resultado de los procedimientos en curso y, en general, sobre las personas mencionadas en la lista establecida por el Comité en su 177º informe y que enviase sus observaciones acerca de los nuevos alegatos de la CIOSL.

318. En diversas comunicaciones, varias organizaciones querellantes se refieren a la represión que se ejercería contra 7 dirigentes de federaciones sindicales para quienes el Gobierno, por intermedio del Ministro del Interior, ha pedido su inculpación. Estos dirigentes, en nombre de sus organizaciones, habían declarado por escrito que las autoridades competentes debían devolver a sus parientes los cuerpos de las personas encontradas en Lonquén.

319. En su comunicación del 6 de noviembre de 1979, la Unión Internacional de Sindicatos de los Trabajadores de la Agricultura, de los Bosques y de las Plantaciones, da precisiones sobre este asunto. Explica que los cadáveres de 15 campesinos miembros de la Confederación "Ranquil" han sido descubiertos el año pasado en un horno de cal abandonado, en Lonquén, cerca de Santiago. Según la organización querellante, los ocho policías culpables de estos asesinatos se han beneficiado de la ley de amnistía y han sido puestos en libertad. Añade que los cadáveres han sido enterrados en una fosa común, en lugar de ser entregados a sus parientes. Fue entonces cuando siete dirigentes sindicales dirigieron una carta al Ministro del Interior acerca de este asunto. El pedido de inculpación formulado por el Ministro del Interior contra ellos fue rechazado, precisa la organización querellante, por el magistrado instructor. La UISTAFP añade que el 15 de septiembre de 1979 la policía había detenido a 35 personas acusadas de perturbar el orden público, con motivo de la celebración de una misa en la Catedral de Santiago en memoria de los 15 campesinos asesinados.

320. Por su parte, la Unión Internacional Sindical del Textil, Vestido, Cuero y Pieles, alega, en su carta del 14 de febrero de 1980, que el 25 de enero de 1980, uno de los siete dirigentes detenidos, Fernando Bobadilla, Presidente de la Federación Nacional Textil y del Vestido, fue condenado a 541 días de presidio.

321. La CIOSL, en su comunicación del 7 de enero de 1980, menciona la detención de Víctor Manuel Muñoz, dirigente del Sindicato Textil Sumar. Parece que se acusa a esta persona de actividades "extrasindicales", contrarias a la ley.

322. La CIOSL también ha sido informada, según indica en sus comunicaciones del 14 y 18 de marzo de 1980, de que la celebración del Día Internacional de la Mujer, organizada el 8 de marzo de 1980 por la Coordinadora Nacional Sindical, fue violentamente reprimida por las autoridades. Según la organización querellante, la policía habría efectuado más de 140 detenciones en Santiago y Valparaíso. Las personas detenidas estarían incomunicadas en lugares de detención desacomodados, o relegadas a lugares conocidos como los más inhóspitos. Seguidamente, la CIOSL suministra una lista de 12 personas relegadas por decisión del Ministro del Interior en virtud del decreto ley núm. 3168.

323. Los alegatos formulados por el Comité Exterior de la CUT en el documento dirigido por la FSM y la CIOSL hacen mención igualmente de la detención de tres trabajadores de la empresa Good Year de Santiago, con motivo de una manifestación pacífica organizada a causa de un conflicto que surgió en dicha empresa.

324. Numerosas comunicaciones de organizaciones querellantes se refieren a la detención de dirigentes sindicales acusados de preparar manifestaciones para la fiesta del trabajo. Los querellantes citan los nombres de Humberto Vergara, Herman Navarro, Alfonso Hernández, Carlos Ulloa, Carlos Morales (dirigente de la Confederación Unidad Obrero-Campesina) y Juan Jara (presidente del sindicato de taxis).

325. A este respecto, la CIOSL explica en su carta del 23 de abril de 1980 que solamente fueron autorizadas las festividades del 1º de Mayo organizadas por el Gobierno. Por su parte, la CMT alega que la intervención de la policía en una manifestación organizada el 1º de Mayo por el Frente Unitario de Trabajadores ocasionó cuatro heridos graves por armas de fuego y fueron detenidos 57 trabajadores por haber provocado desórdenes e incitado a la violencia distribuyendo octavillas y organizando una manifestación en 1º de Mayo en el norte del país. Por último, en su comunicación del 21 de mayo de 1980, la CIOSL se refiere a la detención de Adolfo Poblete Calderón en la región de Talca.

326. En su respuesta del 22 de abril de 1980, refiriéndose a los siete dirigentes sindicales detenidos después de una presentación efectuada en relación con los cadáveres descubiertos en Lonquén, el Gobierno indica que el Ministro del Interior ha transmitido los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que esta decida si los interesados han cometido algún delito contemplado en la ley. El tribunal estimó que existían presunciones fundadas respecto a dos de ellos, Fernando Bobabilla y Alamiro Guzmán. Los otros fueron puestos en libertad. El 24 de enero de 1980, el fiscal acusador pidió la aplicación de una pena de privación de libertad respecto de dos de los interesados por haber actuado en representación de otras personas sin poseer personalidad jurídica para hacerlo. El gobierno señala que los hechos objeto de proceso no están relacionados con las actividades sindicales.

327. En lo que respecta a Victor Manuel Muñoz Espinoza, que se mencionaba en la comunicación de la CIOSL, el gobierno informa que fue detenido el 17 de diciembre de 1979 por haber distribuido libelos subversivos en la vía pública y estar en posesión de unacédula de identidad falsa. El Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago encargado de la investigación estimó que existían presunciones fundadas de su culpabilidad y dictó

una resolución declarándole reo y disponiendo su privación de libertad. El abogado del interesado no pidió su libertad provisional. Ultimamente, el fiscal ha pedido la aplicación de una pena de privación de libertad. El Gobierno declara también que al contrario de lo que alega la CIOSL, Victor Manuel Muñoz no figura entre los dirigentes de los once sindicatos de la Empresa Manufacturera Sumar S.A.

328. El Gobierno explica que, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, un grupo de cuarenta personas realizó manifestaciones en lugares públicos no autorizados y provocó desórdenes, desafiando a la policía que dirigía el tránsito de vehículos y ocasionando destrozos en propiedades públicas y privadas. Se detuvo a un total de 18 hombres y 8 mujeres, de los cuales 10 eran estudiantes, 7 trabajadores, 6 dueñas de casa y 3 personas sin oficio conocido. Todas las mujeres quedaron en libertad después de media hora y lo mismo sucedió con las diez personas restantes. Ocho personas fueron dejadas en permanencia obligada en ciudades cercanas a Valparaíso, con libertad de movimientos en el radio urbano.

329. Por lo que se refiere a los sucesos del 12 de Mayo, el gobierno señala que Carlos Morales, Alfonso Hernández y Herman Navarro fueron detenidos por provocar desórdenes en la vía pública entorpeciendo el tránsito de vehículos. Fueron puestos en libertad el mismo día. Una de las personas mencionadas por los querellantes, a saber, Juan Jara, fue procesada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por haber proferido injurias y calumnias. El interesado se encuentra en libertad provisional desde el 17 de abril. De ser condenado, podrá beneficiarse de una remisión condicional de la pena.

330. En lo que se refiere a Adolfo Poblete Calderón, el Gobierno indica que esta persona fue detenida el 14 de mayo de 1980 y puesta inmediatamente a disposición de los tribunales de Talca. Se le acusa de haber violado las disposiciones de la ley de seguridad interior del Estado. No está incomunicado y ha elegido un abogado defensor.

331. El Comité nota con preocupación que, desde su último examen del caso, en noviembre de 1979, numerosas quejas se han referido a la detención de dirigentes y militantes sindicales. En su respuesta, el Gobierno envía informaciones sobre siete de los dirigentes mencionados por los querellantes, cuya detención no estaría, según éste, relacionada con sus actividades sindicales. Se desprende de estas informaciones que cuatro de ellos comparecerán ante los tribunales y que los otros tres detenidos el 12 de mayo fueron liberados el mismo día.

332. A este respecto, el Comité desea recordar que en muchos casos en que los querellantes alegaban la detención de trabajadores o dirigentes sindicales a causa de sus actividades sindicales y en los que las respuestas de los gobiernos se limitaban a rechazar tales alegatos o a indicar que las detenciones habían sido motivadas por actividades subversivas, por razones de seguridad interna o por delitos de derecho común, el Comité ha tenido por norma rogar a los gobiernos interesados que faciliten informaciones tan precisas como fuese posible acerca de las detenciones alegadas y, en particular, sobre los procedimientos judiciales incoados y el resultado de éstos, a fin de poder examinar los alegatos con conocimiento de causa. Por consiguiente, el Comité desearía recibir informaciones precisas acerca del resultado de los procedimientos judiciales incoados contra estas cuatro personas.

333. El Comité toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno acerca de las manifestaciones organizadas el Día Internacional de la Mujer. Nota en particular, que las personas detenidas han sido puestas en libertad pero que ocho de ellas fueron dejadas en permanencia obligada en diversas ciudades. Parecería que estas medidas habrían sido tomadas por autoridades administrativas. A este respecto, el Comité desea recordar la importancia que atribuye al derecho de toda persona inculpada a beneficiarse de las garantías de un procedimiento judicial regular. En estas condiciones, el Comité estima que las personas detenidas por tomar parte en una manifestación organizada por sindicatos, como las mencionadas en los alegatos, deberían ser liberadas o, en caso de estar inculpadas por algún delito, ser juzgadas por tribunales imparciales e independientes.

334. En lo que concierne a las detenciones efectuadas el 1º de Mayo de 1980, el Comité desea subrayar, como ya lo ha hecho en repetidas ocasiones y en especial en el presente caso, que el derecho de organizar reuniones públicas y desfiles con motivo del 1º de Mayo constituye un aspecto importante de los derechos sindicales, a condición de que se respeten las disposiciones de orden público.

335. Por último, el Comité observa que el Gobierno no ha enviado aún sus observaciones acerca de los alegatos relativos al descubrimiento de los cadáveres de dos dirigentes sindicales en los alrededores de Yumbel; de las detenciones dictadas a raíz de una manifestación de trabajadores de la empresa Good Year, así como de los incidentes acaecidos en la Fiesta del Trabajo y la condena de trabajadores en el norte del país. El Comité se percata también de que desde mayo de 1979 el Gobierno no ha suministrado nuevas informaciones sobre las pesquisas llevadas a cabo acerca de los sindicalistas o antiguos sindicalistas desaparecidos.

336. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que:

- a) sobre la nueva legislación sindical:
 - i) tome nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno, sobre la aplicación de la nueva legislación, así como de las enmiendas introducidas en los decretos-leyes promulgados en junio de 1979;
 - ii) tome nota con interés, en particular de que ciertas enmiendas introducen la posibilidad de recurrir judicialmente contra decisiones administrativas en materia de constitución de sindicatos;
 - iii) lamente que la mayor parte de las disposiciones que dieron lugar a comentarios del Comité no han sido objeto de enmienda;
 - iv) exprese la firme esperanza de que en breve plazo se introducirán las modificaciones necesarias a la luz de los principios de la libertad sindical y de las recomendaciones formuladas por el Comité en su 1989 informe;
 - v) solicite al Gobierno mantenga informado al Comité de toda evolución que se produzca en la materia
- b) en lo que concierne a la destitución del Sr. Daniel Lillo.
 - i) señale que las disposiciones del decreto ley núm. 349 no están conformes con los principios de la libertad sindical e inste al gobierno para que se deroguen estas disposiciones;
 - ii) exprese la firme esperanza de que la legislación relativa a las organizaciones de funcionarios públicos actualmente en estudio reconocerá el derecho sindical a esta categoría de trabajadores;
- c) por lo que se refiere a la disolución de organizaciones sindicales:
 - i) señale que el procedimiento seguido para la disolución de siete organizaciones pronunciada en octubre de 1978, no está de acuerdo con el principio según el cual las organizaciones de trabajadores no deben ser disueltas por vía administrativa y señale a la atención del gobierno el principio expresado en el párrafo 305 *supra* relativo a la devolución de los bienes de las organizaciones disueltas.
 - ii) solicite al Gobierno envíe sus observaciones acerca de la disolución del sindicato del Club de la Unión de Santiago.

- d) en lo tocante al despido de sindicalistas: que solicite al gobierno envíe informaciones sobre los resultados de los procedimientos judiciales entablados por los trabajadores despedidos de la CODELCO, División El Teniente, así como acerca de los nuevos alegatos mencionados en el párrafo 312;
- e) en lo relativo a los alegatos sobre las libertades civiles que:
- i) exprese su preocupación ante los numerosos alegatos sobre detención de dirigentes y militantes sindicales;
 - ii) solicite al Gobierno envíe sus observaciones sobre los alegatos mencionados en los párrafos 323 y 325 supra y, en particular, sobre todo procedimiento judicial en tramitación, en especial acerca de los procesos incoados a los señores Bernardo Bobadilla, Alamiro Guzmán, Víctor Muñoz y Juan Jara;
 - iii) solicite asimismo al Gobierno transmita sus observaciones acerca de los alegatos formulados por la CIOSL en octubre de 1979 (véase el párrafo 316) e informaciones sobre las personas que los querellantes alegaron que habían desaparecido o que estaban detenidas, las cuales figuran en la lista preparada anexa;
 - iv) señale a la atención del Gobierno las consideraciones expresadas en los párrafos 333 y 334 supra relativas a las detenciones efectuadas en las manifestaciones organizadas el Día Internacional de la Mujer y el 1º de Mayo;
- f) tome nota de este informe provisional.

ANEXO

Personas sobre las cuales se habían solicitado
informaciones complementarias al gobierno

Araya Zuleta, Bernardo 1	Ex dirigente de la CUT
Atencio Cortés, Vicente 2	Dirigente obrero
Baeza Cruces, José	Ex miembro del Consejo Directivo Nacional Juvenil de la CUT
Barria A. Pedro, Abel 3	Dirigente juvenil de la CUT, Valdivia
Berrios Cataldo, Lincoyán 1	Dirigente de la Asociación Nacio- nal de Empleados Municipales

Cáceres González, Jorge	Dirigente sindical
Castillo Tapia, Gabriel	Ex dirigente sindical de los trabajadores salitreros
Cepeda Marinkovic, Horacio	Dirigente sindical
Cerda Cuevas, César ¹	Ex dirigente campesino
Contreras Maluje, Carlos ² 3	Miembro del sindicato unico nacional de trabajadores de laboratorio de Química y Farmacia.
Contreras Rojas, Héctor ²	Ex Presidente del sindicato de controladores de Radio Portales.
Corvalán Valencia, José ³	Ex presidente sindical de la municipalidad de Santiago
Cortez Alruiz, Juan ³	Dirigente sindical del servicio nacional de sanidad del hospital de San Juan de Dios.
Cruz Diaz, Lisandro ¹	Dirigente sindical
Diaz Lopez, Victor ²	Ex dirigente de la CUT
Diaz Silva, Lenin ²	Ex dirigente sindical de la mina "La Exótica"
Donaire Cortés, Uldaricio ³	Ex dirigente del sindicato de los empleados y Obreros de Imprenta de Horizonte
Donato Avendaño, Jaime ²	Dirigente Nacional de los trabajadores de la electricidad
Fuentes Rodriguez, Humberto ³	Dirigente de la Federación de la Construcción.
Fuica Vega, Mario	Ex dirigente de los obreros municipales de Renca.
Galvez Rivadeneira, Guillermo ³	Secretario del Sindicato Gráfico de Quimantú
Gianelli Company, Juan ³	Dirigente nacional del SUTE
Lara Rojas, Fernando ³	Dirigente nacional de los trabajadores del textil
Lazo Santander, Luis ¹	Ex dirigente de la Federación de Trabajadores de Empresas Eléctricas.
León Muñoz, Gabriel ²	Dirigente del Sindicato de Suplementeros de Talcahuano.

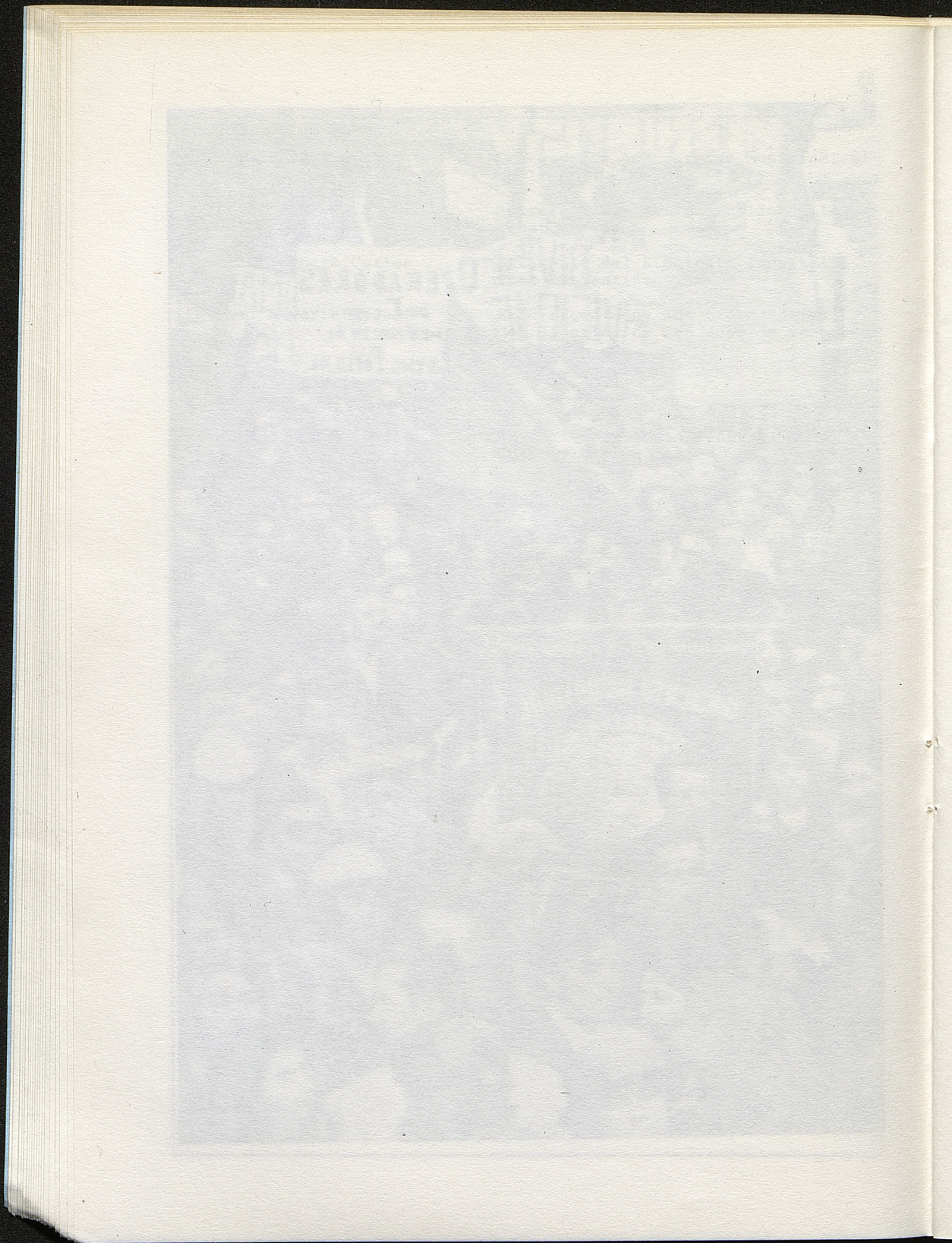
López, Patricio	Supervisor de la Federación de los Textiles de Tomé y Santiago.
López Suárez, Nicolás	Ex dirigente nacional de la CUT; el Gobierno había indicado que se hallaba en libertad, pero posteriormente la FSM informó de su desaparición.
Lorca Tobar, Carlos 3	Dirigente obrero
Macaya Molina, Víctor	Secretario del Sindicato Textil Oveja Tomé.
Martínez Quijón, Guillermo 3	Dirigente del Sindicato de Obreros Gráficos.
Miranda Godoy, Darío	Sindicalista de la Federación del Metal
Montoya Vilches, Raúl	Dirigente de la Federación de la Construcción; el Gobierno había indicado que esta persona estaba en libertad y que había solicitado un pasaporte para viajar al Perú.
Moraga Garcés, Juan 3	Sindicalista de la Federación de la Construcción.
Morales Ramírez, Miguel 3	Presidente del Sindicato de Comerciantes Ambulantes
Navarro Allende, Fernando 3	Dirigente de los ferrocarriles
Nazal Quiroz, Miguel 3	Dirigente de la CUT
Núñez Benavides, Rodolfo 3	Secretario de Organización de la CEPCH
Orellana Catalán, Juan	Ex dirigente de la Confederación Ránquil
Ortiz Letelier, Fernando 3	Dirigente de la APEUCH
Palma Muñoz, José	Ex presidente del Sindicato de Trabajadores de ENDESA

Pereira Plaza, Reinalda 1	Dirigente sindical
Pinto Arroyo, Edras 1	Dirigente sindical
Pizarro Molina, Waldo 3	Dirigente textil
Ponce Vicencio, Exequiel 3	Ex secretario general de la Federación Portuaria de Chile; el Gobierno habia indicado que vivia en la clandestinidad y que se le estaba buscando
Portilla Portilla, Armando 1	Dirigente Textil
Recabarren González, Luis 3	Ex dirigente sindical de la Universidad Técnica del Estado.
Recabarren Rojas, Manuel 3	Dirigente sindical de los trabajadores de imprenta.
Riquelme Pino, Anibal 3	Ex presidente del sindicato profesional de los obreros del gaz, de la calefacción y del sanitario de Santiago.
Sagrado Pacheco, José 3	Dirigente de la Federación de la Construcción
Salgado Salinas, Jorge 3	Dirigente sindical campesino
Santander Miranda, José 3	Ex dirigente sindical
Santos Guerra, José	Secretario del sindicato de trabajadores gráficos
Silva Bustos, Pedro 3	Ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Municipales
Solovera Gallardo, Jorge 3	Sindicalista de la Federación del Metal
Tolosa Vásquez, José 3	Dirigente del Sindicato Gráfico
Vásquez, Rolando	Dirigente nacional de la CUT
Vega Ramirez, Luis	Vicepresidente de la Confederación Ránquil
Vega Vega, Julio 3	Dirigente sindical de los obreros municipales; el Gobierno habia facilitado informaciones acerca de un tal Julio Vega Pais.

Veliz Ramirez, Héctor		Delegado de los obreros municipales en la CUT
Villagrán Rojas, José		Secretario de la Federación de la construcción
Vizcarra Cofré, Carlos	3	Dirigente del Sindicato Industrial Fiat de Santiago
Weibel Navarrete, José	3	Ex dirigente de los trabajadores del Hospital de San José de Santiago
Weibel Ricardo	3	
Zamorano Donoso, Mario	2	Ex dirigente de la Federación del Cuero y del Calzado.

-
1. El Gobierno había indicado que esas personas habían salido del país
 2. El Gobierno había indicado que esas personas no habían sido detenidas
 - 3.- El Gobierno había indicado que se había abierto una investigación judicial sobre la desaparición de esas personas.





PRESENTATION

Nous publions ci-dessus quelques documents et opinions dont le but est d'aider la cause démocratique chilienne à se faire entendre dans la Conférence Internationale du Travail.

De sa lecture nous pouvons tirer une conclusion nette: la dictature de Pinochet persiste à vider systématiquement les droits syndicaux fondamentaux et il est faux qu'il ait eu des progrès dans ce domaine.

A ce sujet, une considération nous semble nécessaire: la domination politique et économique que la dictature a imposé au Chili, nécessite de la dispersion, asservissement et soumission des travailleurs et de leurs organisations et c'est celui-ci l'objectif central du dit "Plan Laboral".

Seulement ainsi cette domination peut prétendre devenir stable. L'écrasement des droits et libertés syndicales n'est absolument pas un fait isolé, dû au hasard ou purement criminel mais une condition pour le maintien du régime.

De là, l'importance de cette dénonciation, de là la nécessité de comprendre le phénomène décrit, pour maintenir et renforcer la solidarité avec le Chili. On comprend ainsi que tout récul imposé à Pinochet sur le plan des relations de travail et sur le plan syndical est un triomphe pour la démocratie, la paix et la liberté au Chili. Pour ces raisons, nous appelons les délégués à la Conférence à se préoccuper de notre pays et à faire tant leur possible pour renforcer la lutte démocratique des travailleurs chiliens.

La présence de la CUT dans le Groupe des Travailleurs; les accords contre la dictature de la Comisión d'Application de normes, convention et recommandations; le refus des mandats aux laquais de Pinochet: voici les objectifs à atteindre à travers l'action du Mouvement Syndical International.

COMITE EXTERIEUR DE LA CENTRALE UNIQUE DES TRAVAILLEURS DU
CHILI

RESUME DU DOCUMENT ADRESSE AUX DELEGUES A L'O.I.T.

L'Etat démocratique chilien a été détruit par le régime militaire fasciste de Pinochet. A sa place, la dictature se propose d'établir un ensemble d'institutions juridiques assurant sa stabilité au pouvoir et garantissant la permanence du modèle économique imposé en faveur des monopoles nationaux et étrangers.

En attendant de compléter le processus qu'elle a appelé "la nouvelle institution", au moyen de l'approbation d'une nouvelle Constitution, la dictature a avancé la promulgation de la législation fasciste par secteurs. Les premiers secteurs "institutionnalisés" sont ceux que le régime considère stratégiques pour le maintien du modèle économique. Le monde du travail constitue la préoccupation déterminante de la dictature pour l'accomplissement de son projet.

Le "Plan Laboral" en vigueur, est l'institutionnalisation de tout le système répressif contre les travailleurs, contre leurs Droits de l'Homme et leurs Libertés Démocratiques et Syndicales, appliqué par la dictature depuis le coup d'Etat pour diviser, atomiser, disperser et détruire le Mouvement Syndical Chilien. Le "Plan" est la légalisation de toutes les mesures de force et de terreur contre l'organisation des travailleurs pratiquées pendant près de 7 ans, invoquant le prétendu "Etat de Guerre" et appliquant les Etats de Siège et d'Urgence.

Normalement, la philosophie de toute législation du travail est celle de donner aux travailleurs des outils et des mécanismes pour défendre leurs droits. Cependant, le "Plan Laboral" refuse aux travailleurs toute possibilité réelle de se défendre contre les patrons et ramène les relations de négociation à une étape dépassée par des décennies de luttes et de progrès social. Dans ces conditions, ses normes ont pu être appliquées aux relations de travail seulement au moyen de la force et de la terreur.

Dans la nouvelle législation, le syndicat n'est plus un instrument de représentation, de défense et de lutte des travailleurs, mais un appendice passif d'un schéma politique, économique et social conçu pour bénéficier au patronat,

Le seul type d'organisation qui est autorisée par cette législation est le syndicat d'entreprise, situation qui fait basculer décisivement toute négociation à la faveur du patron. Il est interdit aux travailleurs de former des syndicats par branche et toute l'organisation des paysans a été détruite ainsi que tout leur pouvoir de négociation. Les travailleurs de la campagne ont été ainsi privés de toute protection.

Le "Plan Laboral" est une incitation à briser la solidarité des travailleurs, encourageant les relations individuelles de travail en dépit des relations collectives. Le système de négociation des syndicats a été organisé par ordre alphabétique des noms des syndicats. Ce système contribue à la dispersion des syndicats d'une même branche, à l'hétérogénéité de leurs revendications et à empêcher la solidarité basée dans la lutte pour les mêmes objectifs dans la négociation.

Au moyen du "Plan Laboral" l'employeur exerce un droit discrétionnaire absolu sur les travailleurs dans l'entreprise. Il dispose pour cela, de tous les mécanismes légaux pour renvoyer le personnel y compris la femme enceinte et les dirigeants syndicaux. La violation de l'immunité maternelle est établie dans le nouveau Code du Travail (Décret-Loi 2.200) et le licenciement des dirigeants syndicaux s'avère toujours possible moyennant les dispositions de l'article 15 du Décret-Loi 2.200 concernant la Sécurité Nationale.

Le "Plan Laboral" est donc un ensemble de normes qui protègent l'employeur face aux actions menées par les travailleurs pour la défense de leurs conditions de travail. Il consacre l'intervention de l'Etat au moyen d'un vaste dispositif de répression contre les travailleurs permettant en somme l'accomplissement de l'objectif avoué du régime: garantir le libre développement du modèle économique en vigueur.

Le "Plan Laboral" constitue le plus grave attentat contre son existence et ses objectifs qu'ait connu le Mouvement Syndical chilien.

Ces derniers mois, la répression directe contre l'organisation des travailleurs s'est à nouveau accrue. Dans la mesure où les Fédérations Nationales de branche mises hors la loi ont réussi à imposer de fait leur existence et ont continué leur activité de défense de leurs affiliés. Dans la mesure où le Mouvement Syndical a rejeté unanimement le "Plan Laboral" et le modèle économique, politique et social qui est à son origine; que les travailleurs ont exigé du gouvernement une réponse sur des centaines de détenus-disparus, syndicalistes en grande partie, et ont exigé le retour des exilés, la réponse de la dictature a été une nouvelle fois la répression brutale et directe.

Nombreux sont les cas des prétendus "affrontements" entre les forces armées et policières et les opposants du régime que les autorités de gouvernement ont rapportés. Il s'agit en réalité de dirigeants ou de militants démocrates qui ont péri sous la torture ou ont été froidement exécutés dans des opérations policières minutieusement planifiées par les services de sécurité. Entre autres on compte les cas de Daniel Acuña dans la ville de La Serena, des professeurs Alvarez Quinteros, à la fin 1979 et Salas Jahnsen pendant les jours qui précèdent le Premier Mai.

Comme il est devenu habituel, pendant les semaines qui précèdent le Premier Mai, la dictature a encore une fois déclenché une violente escalade terroriste qu'elle attribua une fois plus à ses opposants, afin de justifier devant l'opinion publique la répression contre le mouvement syndical et son programme de célébration.

Cette année, le déploiement des moyens de répression atteignit une grande portée. Le gouvernement annonça au début d'avril qu'aucun acte de célébration de la Journée Internationale du Travail serait autorisé et que la seule manifestation à se sujet serait celle que le gouvernement organise chaque année. En même temps la Junte déclancha des opérations de quadrillage accompagnées d'arrestation massives dans les quartiers populaires de Santiago; elle fit arrêter et flageller la totalité de la direction de la Confédération Unité Ouvrière et Paysanne et d'autres fédérations. La dictature emprisonna

les dirigeants de la jeunesse Jaime Cuevas et José Hidalgo, fit défiler dans les rues des effectifs militaires et survoler les quartiers populaires par des hélicoptères afin d'intimider la population.

Pendant les derniers jours du mois de mai le gouvernement entama un procès auprès des Tribunaux de Justice contre le Président du Front Unitaire des Travailleurs (FUT), Carlos Frez et contre Manuel Jimenez, Secrétaire Général du Comité National pour la Défense des Droits Syndicaux, pour prendre la représentation des organisations n'ayant pas de personnalité juridique étant donné que c'est la propre législation de la dictature imposée arbitrairement celle qui empêche que le CDS le FUT et de autres organisations puissent obtenir leur personnalité juridique. Il s'agit donc d'une nouvelle action répressive destinée à empêcher l'expression des organisations syndicales. Elle frappe non seulement les dirigeants de FUT et du Comité mais aussi tous ceux qui soient accusée d'intégrer ou de représenter ce type d'organisations.

Le 29 mai les forces répressives empêchèrent la réalisation d'un meeting de solidarité avec les victimes de la répression sous le prétexte que l'aurotisation pour le faire n'avait pas été demandée aux autorités militaires. Cette attitude de la dictature est absolument arbitraire car le meeting devait s'effectuer dans un local de l'Eglise Catholique et en accord à la législation dictée par le gouvernement. Cette législation dispose que dans ces circonstances l'autorisation préalable n'est pas nécessaire. Le meeting fut convoqué par la Coordination Nationale Syndicale, le Comité des Proches des Emprisonnés, la Commission Chilienne des Droits de l'Homme, le syndicat des avocats, les organisations médicales et les organisations des habitants des quartiers populaires.

Le premier mai les forces répressives arrêterent plus de 500 personnes parmi lesquelles 7 dirigeants de la Fédération CGIL-CISL-UIL d'Italie qui assistaient aux célébrations programmées par le Mouvement Syndical Chilien, Parmi les personnes arrêtées avant ou après le premier mai plus de 50 ont été assignés à résidence dans des endroits inhospitaliers du pays et 10 se trouvent encore en procès. Les autres détenus ont été soumis à des services et à de mauvais traitements dans les endroits de détention. Même des autorités de l'Eglise Catholique, telles Monseigneur Juan de Castro, Vicaire de la Solidarité, Monseigneur Enrique Alvear, Evêque, Monseigneur Alfonso Baeza, Vicaire de la Pastorale Ouvrière et M. Cristian Precht, ancien Vicaire de la Solidarité ont également été victimes de l'agression policière.

Dans les jours qui précédèrent le Premier Mai, les 5 principaux dirigeants de la Fédération des Syndicats de la Métallurgie ont été arrêtés et le gouvernement entama un procès contre eux. De plus deux journalistes de publications démocratiques Jorge Sosa et José Maldavski furent arrêtés par la CNI ont disparus comme l'a dénoncé l'Ordre des Journalistes saisi par leurs proches.

MESSEIERS LES DELEGUES:

La législation du travail promulguée par la dictature ne permet pas l'exercice effectif des Droits et des Libertés Syndicale. Elle viole les dispositions des Conventions N° 87 et 98 et se refuse d'accomplir les résolutions des 59ème et 60ème Conférences de l'OIT.

Cette législation a été imposée par la force aux travailleurs malgré leur refus unanime. Son abrogation est depuis une de leurs principales revendications. Dans ces conditions, le maintien en vigueur du "Plan Laboral" constitue la plus grave menace contre l'existence même d'un mouvement syndical démocratique, indépendant et puissant.

La répression continue et s'intensifie afin d'imposer aux travailleurs le "Plan Laboral" et d'empêcher que leur organisation se développe comme la plus importante expression démocratique du pays,

Dans ce contexte, la délégation de la dictature à cette Conférence, n'a aucune représentativité aux yeux des travailleurs chiliens car ses membres n'ont d'autre mérite pour la composer que leur adhésion inconditionnelle au régime.

Pour toutes ces raisons nous vous demandons de contribuer à l'adoption des mesures suivantes au cours de cette Conférence:

1. Rejeter les mandats des délégués désignés par la Junte en représentation des travailleurs chiliens.
2. Exiger de la dictature par l'intermédiaire du Conseil d'Administration de l'OIT l'abrogation des Décrets du Plan Laboral et le Décret-Loi 3.168 ainsi que la mise en vigueur d'une nouvelle législation du travail qui se subordonne strictement aux préceptes des conventions et recommandations de cette organisations internationale.
3. Incorporer à la plainte du Mouvement Syndical International contre la dictature militaire fasciste (plainte N° 823), les nouvelles dénonciations sur la violation des droits et libertés syndicales et exiger de la Junte le respect des résolutions et recommandations de l'OIT sur ces droits et libertés.

COMITE EXTERIEUR DE LA CENTRALE UNIQUE DES TRAVAILLEURS DU
CHILI

LE PREMIER MAI 1980 AU CHILI

Les jours qui précédèrent le Premier mai, 517 personnes avaient été arrêtées dans des opérations policières effectuées avec un énorme déploiement de policiers armés de mitrailleuses, des nombreux véhicules et même des hélicoptères.

Le Premier mai, les Forces Armées ont été en état d'alerte de 1er degré, le couvre feu a été décrété, les mass media ont été obligatoirement reliés et le lendemain a été déclaré jour férié. Pour beaucoup d'observateurs ce climat rappelait celui des jours qui suivirent le coup d'état du 11 septembre 1973.

Pendant la journée du Premier mai au moins 52 personnes furent arrêtées à Santiago. Une trentaine d'entre elles, furent arrêtées aux alentours du Syndicat IRT, Avenue Vicuna Mackenna où eut lieu un combatif meeting convoqué par le FUT (Front Unitaire des Travailleurs) et une vingtaine d'autres personnes à la Gare Centrale où des étudiants, ouvriers, habitants des quartiers populaires et maîtresses de maison firent un meeting dans la rue, étant brutalement réprimés par les carabiniers.

Des agents de la CN (Centrale Nationale d'Intelligence) vexèrent Monseigneur Enrique Alvear, évêque auxiliaire et 4 Vicaires de Santiago. 4 fonctionnaires de la CNI arrêterent la voiture de propriété de l'évêque, dans laquelle voyageaient les religieux et leur infligèrent des vexations en les mettant contre un mur sous la menace des armes, tandis qu'ils fouillaient minutieusement la voiture à la recherche d'armes. Ensuite, l'évêque auxiliaire Cristian Precht du Vicariat Oriente; Alfonso Baeza de la Pastorale Ouvrière; Miguel Ortega de la Pastorale de la Jeunesse et Fernando Tapia du Vicariat Ouest, ont été soumis à une humiliante fouille personnelle. Ce fait eut lieu

quand les prêtres assistaient au meeting de célébration du Premier mai convoqué par la Coordination Nationale Syndicale au siège du Syndicat Panal.

Le Ministère de l'Intérieur interdit un meeting public dont l'autorisation avait été demandée par le Comité de Défense des Droits Syndicaux qui préside Eduardo Rios, afin de célébrer la Journée du Travail. Le chef de la garnison de Santiago, Général Humberto Gordon, dans une lettre adressée à ce Comité réitéra le refus du gouvernement au meeting qu'aurait lieu à la Place Pedro Aguirre Cerda mais accorda la permission 'aux réunions programmées si elles s'effectuent aux sièges des syndicats ou des associations".

A la veille de la célébration du Premier mai et en synchronisation parfaite avec la répression déclenchée dans la ville, Ricardo Lecaros, Président et Juan Manuel Sepúlveda, Ruben Valdés, Benito Villagras et Rolando Olivares, tous dirigeants de la Fédération de Syndicats de la Métallurgie ont été arrêtés. Ces arrestations aboutissent à un procès initié par une plainte déposée par le Ministère de l'Intérieur fondée sur le décret 2.346 du 17 octobre 1978 qui dissolva 6 Fédérations Nationales et un Syndicat Provincial, parmi lesquelles la Fédération Nationale des Syndicats de la Métallurgie.

Au siège du Syndicat Panal, rue Yungay, eut lieu le meeting de célébration du Premier mai convoqué par la Coordination Nationale Syndicale avec la présence de plus de 2.000 personnes. Le Président de la CNS, Manuel Bustos appela à instaurer un gouvernement qui respecte les travailleurs et il affirma que ce respect pouvait seulement être obtenu par l'unité des travailleurs. Bustos dit que sous le régime actuel les droits syndicaux ont été interdits et s'adressant aux Forces Armées il ajouta "nous, travailleurs chiliens, nous croyons sincèrement qu'elles se sont trompées de compagnie car elles apparaissent avalisant des intérêts étrangers à notre réalité et à nos sentiments. En tant que patriotes nous voulons avec véhémence que l'héritage des Forces Armées soit un Chili Libre et démocratique pas un pays corporatiste, fasciste ou un pays de capitalisme individualiste où la haine et le ressentiment l'emportent. L'orateur souligna que la perpétuation d'un régime qui se cache derrière des objectifs sans délais entraîne le Chili intellectuellement au chaos, à la confusion, à la violence et à l'injustice avec l'aggravation que les Forces Armées auront une image de compromission avec les groupes nazi-fascistes". Il termina son discours disant que "les chiliens nous voulons un Chili Libre, un Chili juste, un Chili démocratique".

Dans le meeting de la CNS des délégations syndicales du Canada, du Pays Bas, de l'Italie et de l'Espagne ainsi que des représentants de la CISL et de la FSM étaient présentes.

Les carabiniers tirèrent en l'air et chargèrent violemment contre des centaines de travailleurs qui manifestaient dans l'Avenue Vicuna Mackenna à la fin du meeting effectué au syndicat IRT qui avait été convoqué par le FUT. Une trentaine de personnes fut arrêté à cet endroit. Dans ce meeting auquel assistait le Vicaire de la Pastorale Ouvrière Alfonso Baeza, en représentation du Cardinal, les orateurs dénoncèrent la grave situation d'exploitation et de privation de leurs droits qui vit actuellement la classe travailleuse chilienne. Le dirigeant syndical mexicain Victor Manuel Duran de la Confédération Latinoaméricaine de Travailleurs (CLAT) et de la Confédération Mondiale du Travail apporta un message de solidarité avec le mouvement syndical chilien.

L'ancien dirigeant syndical et fondateur de la CUT, Clorario Blest fut arrêté à son domicile par la police qui l'empêcha de sortir pendant plusieurs heures.

Deux dirigeants des jeunesses et un dirigeant syndical furent également arrêtés dans le quartier populaire Americo Vespucio.

Dans un message adressé aux travailleurs, transmis par la "Radio Chilena", le Cardinal Archevêque de Santiago, Raúl Silva Henríquez signala avec une profonde préoccupation que les différences entre les riches et les pauvres sont devenues trop grandes, à l'extrême d'exister aujourd'hui deux sociétés au Chili: l'une, développée et puissante et l'autre sous-développée manquant des conditions de vie les plus élémentaires. Le Cardinal dit que cette réalité crée inéluctablement des antagonismes et un climat de violence, Il ajouta que celle-ci est une réalité ancienne mais qui s'est aggravée par la violation des droits de la personne humaine faisant encore plus importante l'exigence de justice sociale.

Pendant le meeting de la Coordination Nationale Syndicale, Angelo Reginni, dirigeant syndical italien, qui présidait une délégation de 12 dirigeants syndicaux de son pays, raconta les vexations auxquelles furent soumis 7 membres de la délégation. Dans sa dénonciation Reginni dit qu'à l'aube du 30 avril des agents de la CNI perquisitionnèrent l'Hôtel Forestal où séjournaient Aluisi Nava, Domenico Bartelli, Marco Calamai, Giovanni Pedretti, Franco Savati, Giovanni Ricci et Luciano Sandrini lesquels furent arrêtés pendant deux heures et demie dans le Quatrième Commissariat de Police de Santiago où ils furent soumis à des interrogatoires et où leur matériel photographique fut détruit. Le Chargé d'Affaires d'Italie auprès du gouvernement militaire chilien, M. Tomaso de Bergotini, intervint pour obtenir leur liberté.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA NOUVELLE LEGISLATION SUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE. IMPOSE PAR LA JUNTE MILITAIRE AU CHILI.

Premier: Il a été exclu de la négociation collective aux travailleurs des institutions de l'administration de l'Etat, centralisés et descentralisés, du pouvoir judiciaire des entreprises et institutions publiques ou privées dont les budgets ont été financés de plus de 50% par l'Etat, directement ou à travers de titres, aux travailleurs sujets au contrat de l'apprentissage (avec le quel s'exerce une brutale exploitation aux mineurs), aux travailleurs engagés pour un chantier déterminé (cette situation touche spécialement les ouvriers et employés du bâtiment), aux travailleurs des services de vigilance et aux superviseurs.

Second: La grève est interdite "lorsqu'elle touche les services publics ou quand la paralysie qu'elle engendre a des graves répercussions sur la santé publique, le ravitaillement de la population, l'économie du pays, ou la sécurité nationale". Il correspond exclusivement à l'autorité gouvernementale de qualifier si la grève touche les activités ci-dessus énoncées. La décision prise par le gouvernement est sans recours.

Troisièmement: Se supprime de la négociation collective que les travailleurs puissent proposer des accords sur la fonction du personnel, sur les systèmes de promotion, le rythme de production, sur l'emploi des machines, que se puissent fixer des rémunérations pour les travailleurs n'appartenant pas au syndicat ou au groupe négociateur, la possibilité de négocier les apports patronaux est exclue, directs ou indirectement, aux organismes syndicaux.

Quatrièmement: La possibilité de négocier d'amélioration générales de caractère social, telles que: la santé, le logement, l'éducation ou la récréation sont empêchées.

Cinquièmement: Des syndicaux d'une même branche de production, de service ou de commerce sont empêchés de négocier conjointement sur des demandes économiques et sociales. Egalement se nie le droit que les fédérations et confédérations des travailleurs puissent négocier avec les entrepreneurs ou avec les employeurs publics. Cependant, les confédérations et fédérations d'employeurs peuvent formuler des pétitions à l'Etat et aux entités de crédit, monétaire ou financier.

Sixièmement: Les travailleurs qui sont engagés dans l'entreprise avec postériorité à la souscription du contrat collectif ou ne participant pas à la négociation ne bénéficient pas de celui-ci.

Septièmement: Dans la pratique le droit de grève est une fiction puisqu'elle se limite à une durée de 60 jours, au bout de laquelle le travailleur se réintègre au travail sous les mêmes conditions précédentes ou renonce "volontairement", en perdant tous les bénéfices établis, et ayant tout simplement le droit de percevoir l'indemnité de chômage.

Il est autorisé, de la même manière, qu'un 20% de travailleurs en conflit puissent convoquer une assemblée syndicale et censurer la Commission Négociatrice.

Egalement le travailleur est autorisé à reprendre son travail après le 30^{ème} jour de grève indépendamment du syndicat ou du groupe négociateur.

D'autre part il est établi que le contrat de travail et tous ses bénéfices sont automatiquement suspendus dès le début de la grève. La totalité des cotisations de prévoyance sociales deviennent la charge des travailleurs, inclue la valeur correspondant à l'employeur.

L'employeur dans les 30 premiers jours de grève peut déclarer le lock out ou la fermeture de l'entreprise. Dans ce cas-la il paierait les cotisations de prévoyance sociale aux travailleurs n'ayant pas arrêté le travail soit parce qu'ils n'étaient pas affiliés au syndicat en conflit. Mais les travailleurs perdraient les bénéfices établis dans le contrat de travail. Pendant la période de grève l'employeur est autorisé à engager de nouveau personnel pour continuer l'activité de l'entreprise.

Huitièmement: Les syndicats doivent présenter leur projet de contrat collectif dans une date fixée par le gouvernement, passé ce délai les travailleurs sont obligés d'attendre une année pour le présenter. Cette mesure est une atteinte aux rémunérations et aux bénéfices sociaux des travailleurs.

Neuvièmement: Dans les entreprises où il n'existe pas des conventions collectives antérieures, les travailleurs peuvent éntamer des négociations seulement si l'employeur considère la période adéquate.

Dixièmeement: Les bénéfices atteint dans la convention antérieure n'auront aucune validité dans le nouveau contrat s'ils ne sont pas spécifiés un à un. Si les bénéfices déjà établit ne sont pas reconnus par l'employeur, ils ne constituent pas un droit acquis.

Onzièmeement: Lorsque une assemblée censure un dirigeant syndiale cela entraîne une sanction à l'ensemble du directoire syndical. Une telle disposition est destinée à diminuer l'activité régulière du syndicat.

Douzièmeement: Un travailleur ayant été inculpé par simple délit sans que celui-ci soit spécifié, ne pourra pas être élu dirigeant syndical. Egalement il ne pourra pas être élu s'il a été inhabilitée par la constitution politique de l'Etat ou les lois du pays, comme nous l'avons signalé à l'occasion de la 65 ème Conférence Général de l'OIT.

Le projet constitutionnel du gouvernement chilien établit des graves discriminations politiques ou idéologiques dans l'exercice des droits civiques. Ces disposition sont valables pour l'exercice de la fonction du dirigeant syndical.

Treizièmeement: La fonction du dirigeant syndical se limite à seize heures par mois ou à quatre heures par semaines. Le salaire et les primes de prévoyance correspondant à ces heures sont prises en charge par le syndicat.

Quatorzièmeement: Le droit qui avait les syndicats industriels de percevoir du travailler sa cotisation syndicale, à partir du moment d'avoir été engagé par l'entreprise, est supprimé. Telle disposition affecte le financement des activités du syndicat. D'autre part l'apport de 3% sur le bénéfice annuel que le patron devait remettre au syndicat est abrogé.

Quizièmeement: Une discrimination salariale est créée à l'intérieur des entreprises à partir du moment où les employeurs ont le droit d'engager du personnel en qualité d'apprentis avec une remunération d'un 76% du salaire minimum, pendant une durée de deux ans.

Seizièmement: Le Plan Laboral a derogué la loi 16.625, sur l'organisation syndicale des paysans, dictés en 1967, laquelle établissait des disposition modernes et efficaces à cet égard.

Dixseptièmement: De même le statut des travailleurs du cuivre a été supprimé. Instrument légal qui établissait un nombre important de droits syndicaux et une négociation collective efficace entre les entreprises et les syndicats de la grande industrie du cuivre.

Dixhuitièmement: Avec les nouvelles disposition sur la négociation collective les systèmes tarifaires obligatoires pour tous les travailleurs de certaines branches de l'activité économique; bâtiment, textile, typographes, etc. ont été éliminés, annulant les droits acquis par les travailleurs après des longues années de lutte.

CAS OU LE COMITE FORMULE DES CONCLUSION INTERIMAIRES

CAS No 823

PLAINTES PRESENTEES CONTRE LE GOUVERNEMENT DU CHILI A L'O.I.T.

289. Le Comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1979 et a soumis, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d'administration.

290. Peu avant et depuis ce dernier examen de l'affaire, le comité a reçu de nouvelles communications des organisations plaignantes suivantes: Centrale Latinoaméricaine de Travailleurs (CLAT) (15 octobre 1979), Union Internationale des Syndicats des Travailleurs de l'Agriculture, des forêts et des plantations (UISTAPP) (6 novembre 1979 et 16 avril 1980), Fédération syndicale mondiale (FSM) (13 décembre 1979, 11 et 14 avril 1980), Union Internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (13 décembre 1979 et 14 février 1980), Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique Latine (CPUSTAL) (14 décembre 1979 et 17 avril 1980), Union Internationale des Syndicats des mineurs (UISM) (17 décembre 1979), Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISF) (17 décembre 1979), Union Internationale des syndicats des transports, (UIST) (20 décembre 1979), Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (20 décembre 1979, 7 et 17 janvier, 14 et 18 mars, 15, 22 et 23 avril et 9 et 21 mai 1980), Union Internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés (25 avril 1980), Confédération Mondiale du Travail (7 et 9 mai 1980). Pour sa part, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 20 février, 22 avril 16, 19 et 26 mai 1980.

291. Le Chili n'a ratifié ni la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. NOUVELLE LEGISLATION SUR LES ORGANISATIONS SYNDICALE ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE.

292. Le gouvernement a promulgué le 29 juin 1979 plusieurs décrets-lois en matière de droits syndicaux et de négociation collective, notamment les décrets-lois n°s. 2756 et 2758 dont le comité a pris connaissance à sa session de novembre 1979. Le comité avait formulé des commentaires sur les textes en question, en particulier au sujet des points suivants: constitution des syndicats, acquisition de la personnalité juridique, statuts

syndicaux, conditions d'éligibilité des dirigeants, inspection de la comptabilité des syndicats, interdiction d'intervenir dans des activités politiques partisans, constitution des fédérations et confédérations, droit syndical des fonctionnaires, champ d'application et niveau de la négociation collective, droit de grève.

293. Dans ces conditions, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, décidé:

- i) de prendre note avec satisfaction de l'abrogation du décret-loi n° 198 qui avait été adopté en décembre 1973 et qui imposait de graves restrictions aux activités syndicales;
- ii) de constater que la promulgation des décrets-lois sur les organisations syndicales et la négociation collective constituait un premier pas important dans l'application des recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation;
- iii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considération exprimés par le comité au sujet de certaines disposition de la nouvelle législation qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective afin que soient introduits les amendements nécessaires;
- iv) d'exprimer l'espoir que la législation serait appliquée dans un esprit conforme aux principes de la liberté syndicale et dans le respect des droits civils, dont l'importance avait été soulignée par la Commission d'investigations et de conciliation;
- v) d)prier le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre des recommandations mentionnés à l'alinéa iii) ci-dessus et de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des décrets-lois.

294. Dans sa communication du 20 février 1980, le gouvernement fait état de certaines modifications techniques à la législation sur les organisations syndicales et la négociation collective, introduites par le décret-loi n° 2950, publié au Journal officiel le 21 novembre, introduites par le décret-loi n° 2758 sur la négociation collective figurent l'introduction de précisions sur les question susceptibles de faire l'objet de négociations collectives, l'octroi du pouvoir de négocier aux directions syndicales, l'élimination de la nécessité d'obtenir la personnalité juridique pour administrer des fonds sociaux. En outre, pendant une année après la mise en vigueur du décret-loi, tous les syndicats antérieurement existants sont habilités à négocier collectivement même si le nombre de leurs adhérents ou le pourcentage de travailleurs qu'ils représentent dans l'entreprise sont inférieurs au niveau requis par la loi. Des modifications

sont également apportées à la détermination du pourcentage de travailleurs, qu'ils représentent dans l'entreprise sont inférieurs à la détermination du pourcentage minimum de travailleurs nécessaire par négociateur collectivement. Ce pourcentage est maintenant fixé par rapport au total de travailleurs pouvant faire l'objet de négociations et non plus par rapport au total de salariés dans l'entreprise.

295. Le gouvernement fournit, tant dans sa communication du 20 février 1980 que dans celle du 22 avril 1980, diverses informations statistiques au sujet des conventions collectives conclues, des mouvements de grève déclenchés et des organisations syndicales constituées. Il apparaît ainsi à la lumière de ces informations qu'entre le 16 août 1979 et le 31 mars 1980, les travailleurs ont présenté 1.931 projets de conventions collectives et 1.753 nouvelles conventions ont été signées. Du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980, 54 grèves, concernant plus de 20.000 travailleurs et d'une durée moyenne de 17,6 jours, ont été enregistrées. L'unique recours à l'arbitrage obligatoire s'est produit au sein de l'Entreprise nationale d'électricité. Au cours des neuf derniers mois, plus de 400 syndicats ainsi qu'une confédération regroupant 18 syndicats et deux fédérations se sont constitués.

296. Dans sa communication du 19 mai 1980, le gouvernement signale que le 1er mai a été promulgué le décret-loi n° 3355 qui introduit quelques modifications à la législation du travail. Il s'agit principalement d'ajustements techniques à la loi sur les organisations syndicales. Le gouvernement mentionne notamment à cet égard les dispositions concernant les cotisations extraordinaires qui peuvent être retenues à la source, les facilités accordées aux dirigeants syndicaux, l'élargissement du droit syndical dans l'agriculture, les délégués du personnel, la négociation collective et les associations d'employeurs.

297. Le gouvernement indique également qu'en matière de constitution et de contrôle des syndicats, des mesures ont été adoptées en vue de limiter le rôle primitivement assigné aux organes administratifs de l'Etat. En effet, il existe désormais une possibilité de recourir devant les tribunaux au sujet des vices de constitution relevés par l'Inspection du travail. En outre, les pouvoirs de la Direction du travail en matière de contrôle font l'objet de limitations. Ainsi, la Direction du travail n'a plus la possibilité de geler des comptes courants et, en cas d'irrégularités constitutives de délits, elle doit présenter une plainte auprès des tribunaux.

298. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la nouvelle législation ainsi que des amendements apportés aux décrets-lois promulgués en juin 1979. Il note en particulier avec intérêt que certains amendements ont introduit la possibilité de recours judiciaire contre des décisions administratives en matière de constitution des syndicats. Le comité doit cependant constater avec regret que la plupart des dispositions concernant les

points rappelés au paragraphe 292 ci-dessus sur lesquels il a formulé des commentaires lors de l'examen de la législation n'ont pas encore fait l'objet d'amendements. Il exprime la ferme espoir que les modifications nécessaires seront introduites dans un bref délai à la lumière des principes de la liberté syndicale et des recommandations formulées par le comité. Le comité souhaite, en outre, demander au gouvernement de le tenir informé de tout développement qui interviendrait en la matière.

B. DESTITUTION D'UN DIRIGEANT SYNDICAL

299. A ses sessions précédentes, le comité avait examiné des allégations portant sur la destitution prononcée le 8 mars 1979 à l'encontre de Daniel Lillo, président de l'Association nationale des employés de douane de Valparaiso. Cette mesure avait été prise par l'intendant de Valparaiso, conformément au décret-loi n° 349 de 1974. Ce décret-loi autorise les intendants et gouverneurs à demander leur démission aux membres des comités directeurs de certains types d'associations, en particulier des organisations de travailleurs du secteur public, en se fondant sur des motifs graves empêchant le fonctionnement de l'organisations et à leur nommer des remplaçants. Au cas où l'intéressé ne présente pas sa démission dans le délai fixé, l'intendant ou le gouverneur publié un arrêté le destituant de sa charge de dirigeant de l'organisation. Dans le cas d'espèce, M. Lillo avait, d'après le gouvernement, donné à la presse une fausse version d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté. Par la suite, le gouvernement avait indiqué que M. Lillo avait fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire de son emploi.

300. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité signalé à l'attention du gouvernement certains principes sur l'importance de la protection contre les actes de discrimination entresyndicale et l'avait prié d'indiquer si le décret-loi n° 349 avait été abrogé en ce qui concerne les organisations de travailleurs du secteur public.

301. Dans sa communication du 16 mai 1980, le gouvernement indique que divers organes du gouvernement étudient actuellement la réforme du statu des fonctionnaires publics. La nouvelle législation qui établira le régime définitif d'association des agents de l'Etat remplacera les normes provisoires contenues dans le décret-loi n° 349. Le gouvernement ajoute que sa philosophie est contraire à l'ingérence des autorités dans les associations et a pour objet de réaffirmer leur liberté et leur autonomie.

302. Il semble ressortir des informations fournies par le gouvernement que le décret-loi n° 349 sur lequel s'est fondée la destitution de Daniel Lillo est toujours en vigueur. En conséquence, le comité doit rappeler que les dispositions de ce décret-loi permettant la destitution des dirigeants des associations de travailleurs du secteur public par les autorités administratives

ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. Il doit insister pour que ces dispositions soient abrogées. Le comité espère en outre que la législation relative aux organisations de fonctionnaires actuellement à l'étude abrogera les dispositions en question et que, d'une façon plus générale, elle accordera le droit syndical aux fonctionnaires publics.

C. DISSOLUTION D'ORGANISATIONS SYNDICALES

a) Organisations dissoutes en octobre 1979.

303. Des allégations avaient été également formulées au sujet de la dissolution par le gouvernement de sept organisations syndicales en octobre 1978. Selon le gouvernement, la conduite des organisations ainsi dissoutes révélait que leur moyen d'action en leurs objectifs coïncidaient avec les principes et les buts de la doctrine marxiste. Les organisations visées avaient présenté un recours constitutionnel de protection devant la Cour d'appel de Santiago qui les avait déboutées en première instance. Cette décision avait été confirmée pour des raisons de procédure par un arrêt prononcé par la Cour suprême au sujet de quatre de ces organisations. Les affaires concernant les trois autres organisations étaient toujours en instance. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement d' fournir des informations sur les résultats des recours encore en instance.

304. Dans sa communication du 22 avril 1980, le gouvernement déclare que la Cour d'appel de Santiago a rejeté le recours présenté par la Confédération nationale Unité ouvrière-paysanne. Cette décision a été confirmée pour des raisons de procédure par la Cour Suprême. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires de la dévolution des biens de cette organisations n'ont pas encore été désignés. Néanmoins, ce patrimoine se trouve provisoirement sous la protection de l'Etat, par l'intermédiaire du ministère des Domaines. Les personnes qui étaient membres de cette organisation ont, précise le gouvernement, toute liberté pour constituer les organisations de leur choix. Le gouvernement indique enfin que le recours de la Fédération nationale du textile et de l'habillement es toujours en instance.

305. Le comité note que la Cour suprême a rejeté, pour des raisons de procédure, le recours présenté par la Confédération nationale Unité ouvrier - paysanne. Dans ces conditions, le comité ne peut que constater que la procédure suivie dans le cas d'espèce pour la dissolution des sept organisations en question n'est pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. Le comité relève d'ailleurs à cet égard, comme il l'a fait dans son rapport antérieur sur le présent cas, que la nouvelle législation syndicale (décret-loi n° 2756, article 54) prévoit que la dissolution des syndicats s'effectue par voie judiciaire. A propos des biens et fonds des organisations dissoutes, le comité estime qu'ils devraient en définitive être répartis entre les membres des organisations ou transférés aux organisations qui leur succèdent.

b) Nouvelles allégations

306. Il est fait mention dans un document du comité extérieur de la centrale unique des travailleurs du Chili, annexé aux communications de la FSM et de la CISL datées des 11 et 23 avril 1980, que la Cour Suprême a prononcé la dissolution du syndicat du Club de l'Union a Santiago, au motif qu'un syndicat ne peut exister dans une institution sans but lucratif. Le gouvernement n'a pas encore fourni ses observations sur cette allégation.

D. LICENCIEMENTS DE SYNDICALISTES

307. Dans sa communications du 17 janvier 1980, la CISL se réfère à des atteintes aux droits syndicaux qui auraient été perpétrées par les autorités chiliennes à l'encontre de quatre travailleurs de la Compagnie chilienne du cuivre (CODELCO), division d'El Teniente. La CISL joint en annexe à sa lettre une communication du Groupement national de défense des droits syndicaux.

308. Il est indiqué dans cette communication que quatre travailleurs de l'entreprise CODELCO, division d'El Teniente, ont été élus membres de la Commission de contrôle des comptes du syndicat industriel de Rancagua. Cette élection avait eu lieu, à la suite d'une censure déposée contre l'ancienne commission coupable, avec la direction syndicale actuelle, de malversation des fonds syndicaux.

309. La communication précise que la nouvelle commission a mené à bien un travail détaillé qui a permis de découvrir des manoeuvres illégales de la direction syndicale avec l'accord, la collusion ou l'indifférence des organes de l'Etat.

310. Il est ajouté dans la communication que la direction syndicale actuelle a fait obstacle aux actions de la commission de contrôle des comptes alors qu'elle est l'unique responsable de la gestion illégale et antistatutaire des fonds. La complicité des fonctionnaires de l'Etat s'explique, selon la communication, par des raisons d'ordre politique. En effet, est-il ajouté, les dirigeants syndicaux responsables de la situation sont favorables au gouvernement et ce dernier les protège. Malgré les pressions et menaces, les membres de la commission de contrôle contiennent leurs enquêtes.

311. Ceci provoque des réactions du gouvernement et de l'entreprise publique CODELCO qui licencia le 2 octobre 1979 les quatre membres de la commission. L'entreprise se fonda pour prendre ces mesures sur le point 10 de la loi n° 16455 qui a trait aux licenciements pour nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, de l'établissements ou service. La direction de l'entreprise répondit aux demandes d'explication qu'il s'agissait "d'ordres supérieurs". De cette manière, poursuit la communication, le gouvernement du Chili, agissant en tant qu'autorité publique et en tant qu'employeur, est intervenu au préju-

dice des membres du syndicat et s'est ingéré dans des questions purement syndicales.

312. La documentation adressée par la FSM et la CISL les 11 et 23 avril 1980 mentionne également des mesures de licenciement prononcés à l'encontre de dirigeants de diverses organisations syndicales: le Syndicat industriel des mines de cuivre de Chuquicamata, l'Association des postes et télégraphes de Concepción et le Syndicat des travailleurs du textile "Andina". En outre, 52 travailleurs de l'entreprise CTI auraient été licenciés par mesure de représailles à la suite d'une grève légale de 17 jours réalisée en décembre 1979.

313. Dans sa communication du 22 avril 1980, le gouvernement se réfère aux licenciements des travailleurs qui auraient été élus membres de la commission de contrôle des comptes du Syndicat industriel de Rancagua (CODELCO) (Division d'El Teniente). Le gouvernement explique que ces personnes présentèrent leur candidatures à cette commission lors d'une assemblée du syndicat tenue le 20 mars 1979. Toutefois, il n'existe aucune trace de leur élection dans le recueil des procès verbaux de l'assemblée. Ils assumèrent pourtant dans les faits ces fonctions et demandèrent un contrôle comptable du syndicat à la Direction du travail. En définitive et à la suite d'une plainte contre le syndicat, la Direction du travail. En définitive et à la suite d'une plainte contre le syndicat, la Direction du travail devra remettre le dossier au juge pénal compétent. En outre, les travailleurs concernés ont soumis la question du licenciement aux tribunaux, lesquels n'ont pas encore rendu leur jugement.

314. De façon générale, le comité croit utile de rappeler d'ores et déjà, en raison du nombre élevé d'allégations concernant des licenciements de syndicalistes, l'importance qu'il attache à une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Il note que les licenciements survenus à l'entreprise CODELCO, division d'El Teniente, font l'objet de procédures judiciaires, et souhaiterait en conséquence être tenu informé des suites qui leur seront données. Le comité souhaiterait également obtenir les observations du gouvernement au sujet des nouvelles allégations de licenciements mentionnés ci-dessus.

E. LIBERTES CIVILES LIEES A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

315. Aux diverses étapes de l'examen du cas, le comité a examiné des allégations relatives à la détention et à la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes. Dans un rapport examiné par le comité, en novembre 1978, le gouvernement avait fourni des informations sur 24 des 67 personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport. En mars 1979, le gouvernement avait signalé que la Cour

d'appel de Santiago avait désigné en mission extraordinaire l'un de ses magistrats pour connaître des affaires concernant les personnes présumées disparues en instance devant les tribunaux de son ressort. Ces affaires concernaient 36 des personnes citées dans les plaintes.

316. Dans une communication d'octobre 1979, la CISL déclarait que 18 cadavres présentant des signes de tortures avaient été découverts aux environs du cimetière de Yumbel. Selon des déclarations des habitants de cette région, les cadavres avaient été enterrés à la fin d'octobre 1975. Un grand déploiement de forces militaires et de carabiniers avait été observé à l'époque dans les alentours. La CISL précisait que les cadavres de deux dirigeants syndicaux de l'industrie du papier de Laja avaient été identifiés.

317. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de continuer à adresser des informations sur le résultat des procédures en cours et, en général, sur les personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177^e rapport et de fournir ses observations au sujet des nouvelles allégations de la CISL.

318. Dans diverses communications, plusieurs organisations plaignantes se réfèrent, à la répression qui serait exercée contre sept dirigeants de fédérations syndicales, dont le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, demande l'inculpation. Ces dirigeants avaient, au nom de leurs organisations, déclaré par écrit que les autorités compétentes devaient rendre à leurs parents les corps de personnes retrouvées à Lonquén.

319. Dans sa communication du 6 novembre 1979, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture des forêts et des plantations apporte des précisions sur cette affaire. Elle explique que les cadavres de 15 paysans membres de la Confédération "Ranquil" ont été trouvés l'année passée dans un four à chaux abandonné, à Lonquén, près de Santiago. Selon l'organisation plaignante, les huit policiers coupables des meurtres ont bénéficié de la loi d'amnistie et sont en liberté. Elle ajoute que les cadavres ont été enterrés dans une fosse commune au lieu d'être remis à leurs parents. C'est alors que sept dirigeants syndicaux ont adressé une lettre au ministre de l'intérieur au sujet de cette affaire. La demande d'inculpation formulée par le ministre de l'intérieur, à leur encontre, a été rejetée, précise l'organisation plaignante, par le magistrat-instructeur. L'UISTAFP ajoute que le 15 septembre 1979 la police a arrêté 35 personnes accusées de perturber l'ordre public, à la suite d'une messe célébrée dans la cathédrale de Santiago à la mémoire des 15 paysans assassinés.

320. Pour sa part, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux allègue dans sa lettre du 14 février 1980 que l'un des sept dirigeants arrêtés, Fernando Bobadilla, président de la Fédération nationale du textile et de l'habillement, a été condamné le 25 janvier 1980 à 541 jours de prison.

321. La CISL mentionne dans sa communication du 7 janvier 1980, l'arrestation de Victor Muñoz, dirigeant du Syndicat "Textil-Sumar". Cette personne serait accusée d'activités "extra-syndicales" contraires à la loi.

322. La CISL a été également informée, indique-t-elle dans ses communications des 14 et 18 mars 1980, que la célébration de la Journée internationale de la femme organisée le 8 mars par la Coordination nationale syndicale, a été violemment réprimée par les autorités. Selon l'organisation plaignante, la police aurait procédé à plus de 140 arrestations à Santiago et Valparaiso. Les personnes arrêtées seraient gardés au secret dans des lieux inhabituels de détention ou seraient assignées à résidence dans des localités connues pour être les moins hospitalières. Par la suite, la CISL a fourni une liste de 12 personnes assignées à résidence par décision du ministre de l'intérieur en vertu du décret-loi n° 3168.

323. Les allégations formulées par le comité extérieur de la CUT dans le document adressé par la FSM et la CISL font également état de l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise Good Year à Santiago, lors d'une manifestation pacifique organisée à l'occasion d'un conflit au sein de cette entreprise.

324. De nombreuses communications des organisations plaignantes concernent l'arrestation de dirigeants syndicaux accusés de préparer des manifestations pour la fête du travail. Les plaignants citent les noms de Humberto Vergara, Herman Navarro, Alfonso Hernández, Carlos Ulloa, Carlos Morales (dirigeants de la Confédération Unité ouvrière-paysanne) et Juan Jara (président du Syndicat des taxis).

325. La CISL explique à cet égard, dans sa lettre du 23 avril 1980, que seules les célébrations du 1er mai organisées par le gouvernement ont été autorisées. La CMT pour sa part allègue que l'intervention de la police lors d'une manifestation organisée par le Front Unitaire des travailleurs le 1er mai a fait quatre blessés graves par armes à feu et que 57 travailleurs ont été arrêtés. En outre, selon la CISL, 37 travailleurs auraient été condamnés le 6 mai dernier pour avoir provoqué le désordre et incité à la violence par la distribution de tracts et l'organisation d'une manifestation le 1er mai dans le nord du pays. Enfin, la CISL se réfère dans sa communication du 21 mai 1980 à l'arrestation d'Adolfo Poblete Calderón, de la région de Talca.

326. Dans sa réponse du 22 avril 1980, le gouvernement indique, au sujet des sept dirigeants syndicaux arrêtés à la suite d'une démarche effectuée au sujet des corps découverts à Lonquen, que le ministère de l'Intérieur a transmis un dossier à la Cour d'appel de Santiago afin que celle-ci décide si les intéressés avaient, en l'espèce, commis un délit aux termes de la loi. Le tribunal estima qu'il existait les présomptions suffisantes à l'égard de deux d'entre eux, Fernando Bobadilla et Alamiro Guzman. Les autres furent laissés en liberté. Le 24 janvier 1980, le procureur demanda l'application d'une peine de prison à l'égard des deux intéressés pour avoir agi en représentation d'autres personnes sans détenir la personnalité juridique pour le faire. Le gouvernement remarque que les motifs à l'origine des poursuites judiciaires ne sont pas liés à des activités syndicales.

327. Au sujet de Victor Manuel Espinoza, qui était mentionné dans une communication de la CISL, le gouvernement indique qu'il a été arrêté le 17 décembre 1979 pour avoir distribué des pamphlets subversifs sur la voie publique et avoir été en possession d'une fausse carte d'identité. Le magistrat de la Cour de Santiago chargé de l'instruction a estimé qu'il existait des présomptions fondées de sa culpabilité et ordonné son incarcération. L'avocat de l'intéressé n'a pas demandé sa mise en liberté provisoire. Récemment, le procureur a requis l'application d'une peine d'emprisonnement. Le gouvernement déclare en outre, contrairement à ce qu'allégué la CISL, que Victor Manuel Muñoz ne figure pas parmi les dirigeants des onze syndicats de l'entreprise Sumar S.A.

328. Au sujet des désordres survenus lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement explique qu'une quarantaine de personnes a manifesté dans des lieux publics non autorisés et a provoqué des désordres, défiant la police qui réglait la circulation et provoquant des dégâts aux propriétés publiques et privées. Un total de 18 hommes et 8 femmes furent arrêtés, dont 10 étudiants, 7 travailleurs, 6 mères de famille et 3 personnes sans profession connue. Toutes les femmes furent mises en liberté après une demi-heure ainsi que 10 autres personnes. Huit personnes ont été ainsi mises sous contrôle domiciliaire dans des localités proches de Valparaiso, avec liberté de mouvement dans l'agglomération.

329. Au sujet des événements du 1er mai, le gouvernement signale que Carlos Morales, Alfonso Hernandez et Herman Navarro ont été arrêtés pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, paralysant la circulation des véhicules. Ils ont été remis en liberté le même jour. Une des personnes mentionnés par les plaignants, à savoir Juan Jara, a été soumise à procès devant la Cour de Santiago pour avoir proféré des injures et des calomnies. L'intéressé se trouve en liberté provisoire depuis le 17 avril. Il pourra, au cas où il serait condamné, bénéficier d'une remise conditionnelle de peine.

330. Au sujet d'Adolfo Poblete Calderón, le gouvernement indique que cette personne a été arrêtée le 14 mai 1980 et mise immédiatement à la disposition des tribunaux de Talca. Il est accusé d'avoir enfreint les dispositions de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. Il n'a pas été mis au secret et a désigné un avocat pour assurer sa défense.

331. Le comité constate avec préoccupation que, depuis le dernier examen du cas en novembre 1979, de nombreuses plaintes se sont référées à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations au sujet de sept des dirigeants mentionnés par les plaignants dont l'arrestation ne serait pas, selon lui, liée à des activités syndicales. Il ressort de ces informations que quatre d'entre eux seraient poursuivis devant les tribunaux et que les trois autres, arrêtés à l'occasion du 1er mai, ont été relâchés le jour même.

332. A cet égard, le comité tient à rappeler que dans de nombreux cas où les plaignants alléguent que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations. En conséquence, le comité souhaiterait recevoir des informations précises sur les résultats des actions judiciaires intentées contre ces quatre personnes.

333. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur les manifestations organisées lors de la Journée internationale de la femme. Il note en particulier que les personnes arrêtées ont été relâchées mais que huit d'entre elles ont été placées sous contrôle domiciliaire. Il semble que ces mesures aient été prises par des autorités administratives. A cet égard, le comité tient à rappeler l'importance qu'il attache au droit pour toute personne inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière. Dans ces conditions, le comité estime que les personnes arrêtées lors d'une manifestation organisée par un syndicat, comme celles ayant fait l'objet des allégations, devraient être soit relâchées, soit, dans le cas où elles sont accusées de délits, être jugées par des tribunaux impartiaux et indépendants.

334. Pour ce qui est des arrestations opérées le 1er mai 1980, le comité tient à souligner comme il l'a fait à maintes reprises et notamment dans le cadre du présent cas que le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges, à l'occasion du 1er mai, à condition que les dispositions sur l'ordre public soient respectées, constitue un aspect important des droits syndicaux.

335. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations au sujet des allégations concernant la découverte de cadâvres de deux dirigeants syndicaux aux environs de Yumbel, les arrestations opérées à l'occasion d'une manifestation des travailleurs de l'entreprise Good Year ainsi que les incidents survenus lors de la Fête du travail et la condamnation de travailleurs dans le nord du pays. Le comité constate enfin que depuis mai 1979 le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles informations concernant les recherches entreprises au sujet des syndicalistes ou anciens syndicalistes disparues.

--- ooo ---

336. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:

- a) au sujet de la nouvelle législation syndicale:
 - i) de prendre note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la nouvelle législation ainsi que des amendements apportés aux décrets-lois promulgués en juin 1979;
 - ii) de noter, en particulier, avec intérêt que certains amendements ont introduit la possibilité de recours judiciaires contre des décisions administratives en matière de constitution des syndicats;
 - iii) de constater avec regret que la plupart des dispositions ayant donné lieu à commentaires du comité n'ont pas encore fait l'objet d'amendements;
 - iv) d'exprimer le ferme espoir que les modifications nécessaires seront introduites dans un bref délai à la lumière des principes de la liberté syndicale et des recommandations formulées par le comité dans son 197e rapport;

- v) de demander au gouvernement de tenir le comité informé de tout développement qui interviendrait en la matière;
- b) au sujet de la destitution de M. Daniel Lillo;
 - i) de signaler que les dispositions du décret-loi n° 349 ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et d'insister pour que ces dispositions soient abrogées;
 - ii) d'exprimer le ferme espoir que la législation relative aux organisations de fonctionnaires actuellement à l'étude accordera le droit syndical à cette catégorie de travailleurs;
- c) au sujet de la dissolution d'organisations syndicales;
 - i) de signaler que la procédure suivie pour la dissolution de sept organisations prononcée en octobre 1978 n'est pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative et d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe exprimé au paragraphe 305 ci-dessus concernant la dévolution des biens des organisations dissoutes;
 - ii) de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet de la dissolution du Syndicat du Club de l'Union à Santiago;
- d) au sujet du licenciement de syndicalistes, de demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires engagées par les travailleurs licenciés de la CODELCO d'El Teniente ainsi que sur les nouvelles allégations mentionnés au paragraphe 312 ci-dessus;
- e) au sujet des allégations concernant les libertés civiles;
 - i) d'exprimer sa préoccupation devant les nombreuses allégations relatives à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux;
 - ii) de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations mentionnées aux paragraphes 323 à 325 ci-dessus et, en particulier, sur toute procédure judiciaire en cours, notamment sur les procès intentés contre MM. Fernando Bpbadilla, Alamiro Guzmán, Victor Muñoz et Juan Jara;
 - iii) de demander également au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées par la CISL en octobre 1979 (voir paragraphe 316 ci-dessus) et des informations sur les personnes dont les plaignants avaient allégué qu'elles étaient disparues ou détenues et qui figurent en annexe;

iv) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées aux paragraphes 333 et 335 ci-dessus concernant les arrestations effectuées lors de manifestations organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme et du 1er mai;

f) de prendre note de ce rapport intérimaire.

ANNEXE

PERSONNES POUR LESQUELLES DES INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES AVAIENT ETE DEMANDEES
AU GOUVERNEMENT

Araya Zuleta, Bernardo 1	ancien dirigeant de la CUT
Atencio Cortés, Vicente 2	dirigeant ouvrier
Baeza Cruces, José	ancien membre du Conseil national directeur de la jeunesse de la CUT
Barria A. Pedro, Abel 3	dirigeant de la jeunesse de la CUT, Valdivia
Berrios Cataldo, Lincoyán 1	dirigeant de l'Association nationale des employés municipaux
Cáceres González, Jorge	dirigeant syndical
Castillo Tapia, Gabriel	ancien dirigeant syndical des travailleurs du salpêtre
Cepeda Marinkovic, Horacio 1	dirigeant syndical
Cerda Cuevas, Cesar 2	ancien dirigeant paysan
Contreras Maluje, Carlos 3	membre du Syndicat unique national des travailleurs des laboratoires chimiques et pharmaceutiques.
Contreras Rojas, Héctor 2	ancien président du Syndicat des contrôleurs de Radio Portales
Corvalan Valencia, José 3	ancien président syndical de la municipalité de Santiago
Cortez Alruiz, Juan 3	dirigeant syndical, Service national de santé, Hôpital de San Juan de Dios

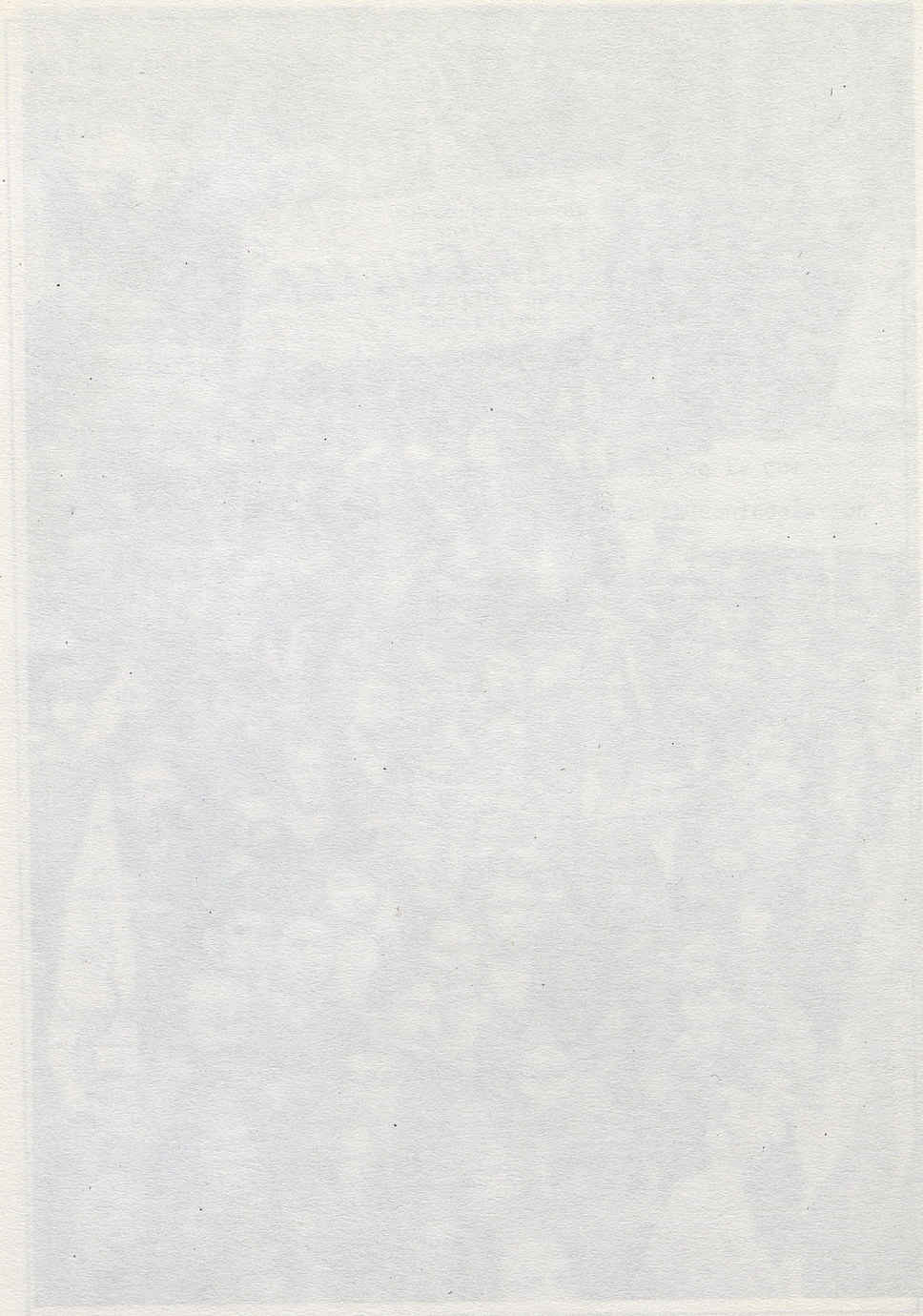
Cruz Diaz, Lisandro 1	dirigeant syndical
Diaz López, Victor 2	ancien dirigeant de la CUT
Diaz Silva, Lenin 2	dirigeant syndical des mines "La Exótica"
Donaire Cortés, Uldarico 3	ancien dirigeant du Syndicat de l'imprimerie Horizonte
Donato Avendaño, Jaime 2	dirigeant national des travailleurs de l'électricité
Fuentes Rodríguez, Humberto 3	dirigeant de la Fédération du bâtiment
Fuica Vega, Mario	ancien dirigeant des ouvriers muni- cipaux de Renca
Galvez Rivadeneira, Guillermo 3	secrétaire du syndicat du livre Quimantu
Gianelli Company, Juan 3	dirigeant national de SUTE
Lara Rojas, Fernando 3	dirigeant national des travailleurs du textile
Lazo Santander, Luis 1	ancien dirigeant de la Fédération des travailleurs des entreprises électriques
Leon Muñoz, Gabriel 2	dirigeant du Syndicat des crieurs de journaux de Talcahuano
López, Patricio	Contrôleur de la Fédération des ouvriers textiles de Tomé et San- tiago
López Suárez, Nicolás	ancien dirigeant national de la CUT; le gouvernement avait indiqué qu'il était en liberté mais, par la suite, la FSM a signalé sa dispari- tion
Lorca Tobar, Carlos 3	dirigeant ouvrier
Macaya Molina, Victor	secrétaire du Syndicat textile oveja Tomé
Martinez Quijón, Guillermo 3	dirigeant du Syndicat des ouvriers du livre

Miranda Godoy, Dario	syndicaliste de la Fédération du métal
Montoya Vilches, Raúl	dirigeant de la Fédération du bâtiment; le gouvernement avait indiqué que cette personne était en liberté et avait demandé un passeport pour le Pérou
Moraga Garcés, Juan 3	syndicaliste de la Fédération du bâtiment
Morales Ramirez, Miguel 3	président du syndicat des commerçants non sédentaires
Navarro Allende, Fernando 3	dirigeant des chemins de fer
Nazar Quiroz, Miguel 3	dirigeant de la CUT
Núñez Benavides, Rodolfo 3	secrétaire de l'organisation de la CEPCH
Orellana Catalán, Juan	ancien dirigeant de la Confédération Rancúil
Ortiz Letelier, Fernando 3	dirigeant de l'APEUCH
Palma Muñoz, José	ancien président du Sindicato des travailleurs d'ENDESA
Pereira Plaza, Reinalda 1	dirigeante syndicale
Pinto Arroyo, Edras 1	dirigeant syndical
Pizarro Molina, Waldo 3	dirigeant textile
Ponce Vicencio, Exequiel 3	ancien secrétaire général de la Fédération portuaire du Chili; le gouvernement avait indiqué qu'il se trouvait dans la clandestinité et était recherché
Portilla Portilla, Armando 1	dirigeant textile
Recabarrén González, Luis 3	ancien dirigeant syndical de l'université technique de l'Etat
Recabarrén Rojas, Manuel 3	dirigeant syndical des travailleurs de l'imprimerie
Riquelme Pino, Anibal 3	ancien président du syndicat professionnel des ouvriers du gaz, du chauffage et du sanitaire de Santiago

Sagredo Pacheco, José 3	dirigeant de la Fédération du bâtiment
Salgado Salinas, Jorge 3	dirigeant syndical paysan
Santander Miranda, José 3	ancien dirigeant syndical
Santos Guerra, José	secrétaire du Syndicat des travailleurs du livre
Silva Bustos, Pedro 3	ancien vice-président de l'Association nationale des employés municipaux
Solovera Gallardo, Jorge 3	syndicaliste de la Fédération du métal
Tolosa Vasquez, José 3	dirigeant du Syndicat du livre
Vasquez, Rolando	dirigeant nationale de la CUT
Vega Ramirez, Luis	vice-président de la Confédération Ranquil
Vega Vega, Julio 3	dirigeant syndical des ouvriers municipaux; le gouvernement avait donné des informations sur un certain Julio Vega Pais
Veliz Ramirez, Hector	délégué des ouvriers municipaux à la CUT
Villagran Rojas, José	secrétaire de la Fédération du bâtiment
Vizcarra Cofré, Carlos 3	dirigeant du Syndicat industriel Fiat de Santiago
Weibel Navarrete, José 3	ancien dirigeant des travailleurs de l'hôpital San José de Santiago
Weibel, Ricardo 3	
Zamorano Donoso, Mario 2	ancien dirigeant de la Fédération du cuir et de la chaussure

1. Le gouvernement avait indiqué que ces personnes avaient quitté le pays.
2. Le gouvernement avait indiqué que ces personnes n'avaient pas été arrêtées.
3. Le gouvernement avait indiqué qu'une enquête était menée à propos de la disparition de ces personnes.





INTRODUCTION

This publication contains some documents and opinions interded for helping the chilean democratic cause to be heard in the International Labour Organisation. Fromt its reeding we can draw a neat conclusion: Pinochet's dictatorship continues to violates systematically fondamental trade union rights and the idea of some progressionthis field is false.

On: the subject, a consideration seems to us as necessary: the political and economical domination that dictatorship has imposed id Chile requires dispersion, submission and subjection of workers and trade unions and that is the main objective of the so-called "Labour Plan". Only thus mastery can pretend stability. So, the overwhelming outrage upon trade union rights and freedoms is not an isolated, casual or merely criminal fact but a condition for the permanence of the regime.

Therefore the importance of the denunciation, the necessity of understanding the phenomenon already described to maintain and to reinforce the solidarity with Chile. Thus, obviously every step back imposed to Pinochet in the labour and trade union arena is a triumph for democracy, peace and liberty in Chile. That is why we appeal to ILO's Conference to be concerned about our country and to make their best to reinforce the democratic struggle of chilean workers.

- CUT's presence in the Working Group at the Conference.
- The agreements against the dictatorship in the Application of Conventions and Recommendations Commission are the aims to reach through this Conference with the efforts of the International Trade Union Movement.
- Non recognition of powers to Pinochet's footmen.

EXTERNAL COMMITTEE OF THE CENTER TRADE UNION OF CHILE.

SUMMARY OF DOCUMENT ADDRESSED TO THE DELEGATES TO ILO'S.

The Chilean democratic state has been destroyed by the fascist military regime of Pinochet: just as the dictatorship intends to establish a number of juridical institutions to ensure its stability in power and guarantee the permanence of the economic model imposed in favour of national and foreign monopolies.

While waiting for the confirmation of the process called "new institution", by means of the approval of a new Constitution, the dictatorship has issued parts of the new fascist legislation in advance. The first institutionalized areas are those considered as strategic to maintain the economic model. Workers' organizations are from this point of view the most important preoccupation for the dictatorship in order to carry out its ends.

The "Labour Plan" in force since June 1979 represents the institutionalization of the whole repressive system against workers, against Human Rights and Democratic and Trade Union Liberties to divide, atomize, disperse and destroy the Chilean Trade Union Movement; it means the legalization of all force and terror methods against workers' organizations employed for almost 7 years invoking the so-called State of War and setting in force State of Siege and Emergency:

Normally, the philosophy of every labour legislation is to give to the workers implements and legal arms to defend their rights; however, the "Labour Plan" refuses the workers any real possibility to defend themselves before the employers and brings back the workers' organizations to a state out-dated by decades of struggle and social progress.

In these conditions, their norms could only be imposed to the workers' organizations by means of force and terror:

With the "Plan Laboral" the manager has discretionary power over employment in the enterprise. He has at hand all the legal mechanisms to dismiss workers including the pregnant woman and the trade union leaders. The violation of material immunity is established in the new Labour Code (D.L. 2.200) and the dismissal of trade union leaders is always obtainable by means of the disposition of the Article 15 of the decree law 2.200 about National Security.

Thus the "Labour Plan" is a body of laws to defend the manager from any action undertaken by workers concerning their working conditions and to consecrate the state's intervention - with an extensive, wide, broad, ample repressive mechanism against workers - to reach the admitted aim of the regime: to guarantee the free development of the economic model in force.

The "Labour Plan" constitutes the most serious attempt against its existence and its perspective ever known by the Chilean Trade Union Movement.

During last months, direct repression against workers' organization has broken out again. Since National Federations put out of law have however imposed their survival and have continued their activity in defence of their affiliates; since the trade union movement has unanimously rejected the "Labour Plan" and the economical, political and social model which originates it; since workers have demanded an answer from the government about the hundreds of detained -disappeared people- most of them trade unionists and have demanded the returning of exiles forbidden from living in their own country, the dictatorship's response has been once more the brutal and direct repression.

Numerous are the cases of the so-called "confrontations" between armed forces and opposition members reported by the government. Actually, political or union democratic leaders have perished in torture or have been coldly executed during police sweeps meticulously planned by security services. Among murdered persons are counted Daniel Acuña killed in La Serena, and the teachers Alvarez Quinteros murdered at the end of 1979 and Salas Jahnsen in last April.

As usually, when the May Day approaches, the dictatorship unleashed a violent terrorist campaign imputed to the opposition to justify before public opinion the repression against the trade union movement and its celebration program.

This year, the repressive deployment reached a great magnitude. The government announced the first days of April that no meeting of celebration of workers Day should be authorized and that the only manifestation of that day would be then one the government itself organizes every year. At the same time the dictatorship unleashed ample sweeping operations with massive detentions in the popular areas in Santiago; it arrested and made flagellate the whole leadership of the united confederation of peasants and workers and other federations. Some youth's leaders such as Jaime Cuevas and José Hidalgo were imprisoned while armed forces made a great military deployment in the streets of Santiago and even helicopters overflew the popular areas in order to intimidate people.

About the end of May the military government lodged a complaint against the President of the Unitarian Front of Workers (FUT), Carlos Frez and against Manuel Jimenez, General Secretary of the National Committee for the Defence of Trade Union Rights because of representing organizations without legal personality. Considering that it is the dictatorship's legislation which impedes that these or others organizations may obtain their legal personality we think it is only a new repressive action to prevent the expression of trade unions, which not only strikes the FUT and the Committee of Defence's leaders but everyone or leading that kind of organizations.

On the 22 th May the repressive forces impeded a meeting of solidarity towards the victims of the repression, under the pretext that its promoters had not asked for the authorization of the military authorities. This attitude of the dictatorship is absolutely arbitrary, for the meeting was supposed to take place in a house of the Catholic Church and within the legislation promulgated by the government. The meeting was convoked by the National Coordination of Trade Unions and

the Committee of Close Relatives of the Emprisonned, the Chilean Commission of Human Rights, the Lawyers Association, the Chilean medical organizations and the organizations of inhabitants of popular areas of Santiago.

Some days before the Pirts of May, the 5 principal leaders of the Federation of Metalworkers were arrested and the Government started a trial against hem. Besides, two journalists working for democratic publications, Jorge Soza and José Maldavski disappeared after having been arrested by security policemen according to the denunciation made by the Journalist Association under the request of their families.

The May Day the repressive forces arrested more than 500 people among them 7 leaders of the Federation CGIL-CISL-UIL of Italy who attended the celebrations programmed by the Chilean trade union movement. More than 50 persons arrested before, during or after the Workers Day were exiled in inhospitable places. The others suffered rough and degrading treatments in the detention places moreover several bishops and high dignitaires of the Catholic Church such as Monsignor Enrique Alvear, Monsignor Juan de Castro Vicar of the Solidarity, Monsignor Alfonso Baeza Vicar of the workers pastoral and the priest Cristian Precht, former Vicar of the Solidarity, were as well victims of the police agression.

MESSRS DELEGATES:

The labour legislation promulgated by the dictatorship does not permit the real exercice of the trade union rights and liberties. It breaks the disposition of Conventions 87 and 98 and deliberately pass over the resolutions of the 59th and 60th ILO'S conferences.

This legislation has been imposed by force to workers in spite of their unanimous reject of it and its abolition has become one of the most important request of the trade union movement. In this conditions the applicability of the "Labour Plan" constitutes the most serious menace against the existence of a democratic, independent and powerful trade union movement.

The repression continues and intensifies to impose the Labour Plan to the workers and to prevent trade union movement to develop itself as the main democratic expression all over country. For this reasons we solicit you to contribute to the adoption of the following measures:

1. To reject the powers of the delegates appointed by the Junta on behalf of Chilean workers.
2. To demand from the dictatorship through ILO'S Government body -the abolition of the Decree Laws 3.168 and the promulgation of a new labpir legislation which atrichly respect the precepts of the conventions and recommendations of this international organization.
3. To embody in the complaint N° 823 of the International Trade Union Movement against the fascist military Junta the new violations of trade union rights and liberties and to demand from the Junta the fullfilment of the resolutions and recommendations about those rights and liberties approved by the ILO.

EXTERIOR COMMITTEE OF THE CENTER TRADE UNION OF CHILE

THE FIRTS OF MAY 1980 IN CHILE

On the days before the First of May 517 people have been arrested in police sweeps performed with great deployment of policemen with machine-guns, numerous cars and even with helicopters.

The First of May elapsed with all the branches of Armed Forces on the alert in the first degree, with curfew, obligatory broadcasting stations connection and the 2nd May being declared off-day. To many observers this atmosphere recalled the days that followed the military coup ont the 11th September 1973.

The same May Day at least 52 people were arrested in Santiago. About thirty of them in the surroundings of the IRT trade union in Vicuña Mackenna where it was hold a pugnacious meeting called by the FUT (Unitarian Front of Workers). About twenty others were arrested in the Central Station where students workers, people of the popular areas and housewives met on the street being brutally repressed by the carabineros.

Officials of the CNI (National Intelligence Agency) offended Monsignor Enrique Alvear, assistant bishop of Santiago and 4 vicars of Santiago. 4 officials of the CNI stopped the bishop's car and threatened the priests who were with him. The priests were put against the wall, submitted to vexations while their car was minutiously searched looking for weapons. Afterwards, the assistant bishop, Cristian Precht from the East Vicary, Alfonso Baeza from the Workers Pastoral, Miguel Ortega from the Youth's Pastoral and Fernando Tapia from the West Vicary were submitted to a humiliant search. This provocation was undertook when the priests headed to the meeting

with which the National Coordination of Trade Unions celebrated the May Day in the Panal Union's local.

The Home Ministry forbade the public meeting organized by the Committee for the Defence of Trade Union Rights, headed by Eduardo Rios to celebrate the May Day. The chief of the garrison of Santiago, General Humberto Gordon, in a letter sent to this Committee insisted in the refusal of the authorization for the meeting in the Pedro Aguirre Cerda Square, but gave the government's permission "only if the meetings took place in the trade union headquarters or in the association sites".

On the May Day's eve and perfectly synchronized with the repression unleashed by the Junta, Ricardo Lecaros, President of the Federation of Metalworkers Union, and Juan Manuel Sepulveda, Ruben Valdes, Benito Villagra and Rolando Olivares leaders of the same federation were arrested. Their arrests are due to a trial started against them by the Home Ministry based on the dispositions of the Decree Law 2.346 of 17th October 1978 which dissolved 6 National Federations and a provincial union, among them the Federation of Metalworkers.

In the site of the Panal Union, Yungay Street, took place the celebration meeting convoked by the National Coordination of Trade Unions and it was attended to by more than 2000 people. Manuel Bustos, president of the CNS, appealed to establish a government respectful of workers and he said that this could only be obtained by workers unity. Bustos said that under the present regime their union rights had been forbidden and addressing himself to the Armed Forces he added: "We, Chilean workers sincerely believe that they have made a mistake in the choice of their partners, and they appear backing some interests foreigners to our reality and to our feelings. As patriots we vehemently want that the Armed Forces inheritance be a free and democratic Chile and not a corporative, fascista country or even a capitalistic individualistic one where hatred and resentment master". The speaker underlined that the perpetuation of a regime sustained on aims without delay carries Chile ineluctably to chaos, confusion, violence and injustice, with the aggravation that the Armed Forces will appear involved with the nazi-fascist groups". Finally he said that "we Chilean workers, we want a free Chile, a fair and democratic Chile".

Delegations from Canada, Holland, Italy, Spain, ICFTU (International Confederation of Free Trade Unions) and WFTU (World Federation of Trade Unions) were present in the CNS's meeting.

The carabineros shot overhead and charged violently against workers in Vicuña Mackenna Avenue at the end of the meeting convoked by the FUT in IRT's trade union site. About thirty people were arrested. During the meeting, attended by the Vicar of the Workers' Pastoral, Alfonso Baeza on behalf of the Cardinal, the speakers denounced the critical situation of exploitation and privation of rights endured by Chilean working class nowadays. The Mexican trade union leader Victor Manuel Duran from the Latinoamerican Workers Confederation and from the World Confederation of Labour brought a solidarity message to the Chilean trade union movement.

The former trade union leader and founder of CUT, Clotario Blest, was arrested in his domicile by the police who prevented him to go out for several hours.

Two Youth's leaders and another trade union leader were arrested at the Americo Vespucio Area.

In a message to workers, broadcasted by the Radio Chilena, the Cardinal Archbishop of Santiago, Monsignor Raul Silva Henriquez, pointed out with deep preoccupation that differences have become so large between rich people and poor people that one can say that in Chile exist two societies. One of them developed and powerful and the other underdeveloped and lacking the most essential life conditions. The Cardinal said that this reality creates unavoidable antagonisms and a violence atmosphere and though it is not a new reality it has been worsen by the overwhelming of Human Rights. That is why the old claim for social justice becomes much more important.

During the meeting of the CNS, Angelo Reginni, Italian trade union leader, who headed the delegation of 12 Italian union leaders related the vexations suffered by seven members of his delegation. Reginni said that in the daybreak of the 30th April agents of the CNI came to the Forestal Hotel where stayed Aluisi Nava, Domenico Bartelli, Marco Calamai, Giovanni Pedretti, Franco Savati, Giovanni Ricci and Luciano Sandrini. Their rooms were searched and they were arrested for two and a half hours in the Fourth Police Station of Santiago where they were interrogated and their photographic equipment was destroyed. The business plenipotentiary of Italy before the Chilean government Mr. Tomaso de Bergotini intervened before the military authorities to get them free.

REMARKS ON THE NEW LEGISLATION ABOUT TRADE UNIONS AND COLLECTIVE BARGAIN IMPOSED BY THE CHILEAN MILITARY JUNTA

- 1.- Workers in public administration (centralized and local), in public legal sectors, in public and private enterprises and institutions at least 50% financed by the State (directly or by taxes) and workers under apprenticeship contracts (by which means minors are heavily exploited) as well as those under contract for a specific task (which affects in particular building workers), watchmen and supervisors are excluded from collective bargaining.
- 2.- Workers in public services and enterprises, those listed above, and workers "whose absence from work might cause serious prejudice to health, supply to the population, the national economy or security" (being determined exclusively and unilaterally by the Government, and against which there is no appeal) may not strike.
- 3.- Within the framework of collective bargaining workers may not propose agreements on the use of labour, promotion patterns, rate of output, use of machinery, nor may wages for workers not belonging to the trade union or bargaining group be negotiated, nor may employers' support (direct or indirect) be obtained for trade union bodies.

4.- There may be no agreements on general improvements of a social nature, such as health, housing, education or leisure.

5.- Trade unions in the same field of production, service or trade may not undertake joint negotiations in regard to economic and social demands. Workers' federation may not negotiate with equivalent employers' organisations or public employers. However, employers' federations may submit request to the State and to credit, monetary and financial bodies.

6.- Workers who do not participate in any negotiation or who commence employment subsequent to the making of a collective contract do not benefit from the latter.

7.- In practice, there is no right to strike since a strike may not continue for more than 60 days, after which the workers either resumes work under the same terms as established in the existing contract or is considered as having "voluntarily" given up his established benefits and being entitled only to unemployment benefit.

20% of workers involved in a conflict may call a trade union assembly and censure the bargaining committee. Similarly, a worker may resume work after 30 days on strike independently of the trade union or negotiating group.

From the time a strike commences the employment contract and payment of all benefits under the contract are automatically suspended. The worker is liable for all taxes, including the part normally contributed by the employer.

In the case of workers who continue working when a strike has commenced, whether it be because they are not participating in the negotiations or are not affiliated to the trade union concerned, the employer may declare a lock-out within 30 days of the commencement of the strike and is liable only for the taxes of such workers, who consequently lose the wages and benefits due to them under their employment contract.

During the time of the strike the employer may employ such personnel as he deems necessary for the functioning of the enterprise.

8.- Trade unions or workers who fail to submit their proposal for a collective contract within the time specified by the Government are disqualified from submitting it for one year, thereby prejudicing workers' salaries and social benefits.

9.- In enterprises where there is no existing collective agreement, workers may only exercise their bargaining right if the employer deems the time to be right.

10.- Any gains or benefits won in the agreement prior to the one under negotiation shall only remain valid if specifically stated in the new contract. This means that benefits already obtained have been diminished or that each gain has to be discussed again, which gives a clear advantage to the employer in collective bargaining.

11.- Trade union leadership is under attack by the provision that when an assembly censures one of its leaders it is automatically censuring the trade union leadership as a whole. This hampers and complicates regular trade union activity by detracting from the continuity of its action and operation.

12.- A worker may not be elected trade union leader if legal action is being taken against him, at any stage in the proceedings and without the court having found against him. A worker may not be elected if he does not have capacity as established in the National Constitution or the national legislation. As we pointed out at the 65th ILO General Conference, the draft constitution prepared by the Government contains serious political and ideological discrimination in the exercise of civil rights.

13.- Time spent in trade union leadership is limited to 16 hours per month or 4 hours per week, with the added disadvantage that payment of wages, taxes and other benefits must be met by the trade union.

14.- Industrial trade unions no longer have the right to receive trade union contributions from a worker from the commencement of his employment. This prejudices the normal financing of the trade union.

The employer is no longer required to contribute an annual 3% contribution.

15.- Wage discrimination is encouraged by making it possible for the employer to engage personnel as apprentices for up to two years remuneration at 75% minimum income.

16.- Law 16.625, approved by a majority in Congress (Parliament) in 1967, on unionization for agricultural workers has been repealed.

17.- The Copper Workers' Statute, the legal instrument establishing major trade union rights and collective bargaining rules between enterprises and trade unions in the Gran Minería del Cobre de Chile, has been repealed.

18.- National tariff systems established for workers in different branches (maritime, textile, workers, etc.) have not been enforced. Long-standing major gains and benefits have therefore been lost and thousands of workers in these sectors have no protection.

GOVERNMENT OF CHILE
The following text is a reproduction of the original document as it appears in the Chilean Archives. It is a document of the Chilean Government, dated 1967, regarding the repeal of laws 16.625 and the Copper Workers' Statute. The text is in Spanish and is a formal report or document. It discusses the impact of these laws on workers and the government's decision to repeal them. The text is mirrored on the reverse side of the page.

CASES IN WHICH THE COMMITTEE HAS REACHED
INTERIM CONCLUSIONS

Case No 823

**COMPLAINTS PRESENTED BY THE
INTERNATIONAL CONFEDERATION OF FREE
TRADE UNIONS, THE WORLD
CONFEDERATION OF LABOUR THE WORLD
FEDERATION OF TRADE UNIONS
AND SEVERAL OTHER TRADE
UNION ORGANISATIONS AGAINST THE
GOVERNMENT OF CHILE**

289. The last time the Committee examined this case was at its November 1979 Session, when it submitted an interim report to the Governing Body.

290. Shortly before and since this last examination of this case, the Committee received new communications from the following complainant organisations: the Latin American Central of Workers (CLAT) (15 October 1979), the Trade Unions International of Agricultural, Forestry and Plantation Workers (UIS-TAFP) (6 November 1979 and 16 April 1980), the World Federation of Trade Unions (WFTU) (13 December 1979, 11 and 14 April 1980), the Trade Unions International of Textile, Clothing, Leather and Fur Workers (13 December 1979 and 14 February 1989), the Permanent Congress of Trade Unions Unity of Latin American Workers (CPUSTAL) (14 December 1979 and 17 April 1980), the Miners' Trade Unions International (WFTU) (17 December 1979), the International Federation of Teachers' Unions (IFTU) (17 December 1979), the Trade Unions International of Transport Workers (UIST) (20 December 1979), the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) (20 December, 7 and 17 January, 14 and 19 March, 15, 22 and 24 April and 9 and 21 May 1980), the Trade Unions International of Public and Allied Employees (25 April 1989), World Confederation of Labour (7 and 9 May 1989). The Government sent its observations in communications dated 20 February, 22 April, and 16, 19 and 26 May 1980.

291. Chile has ratified neither the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No 87) nor the Right to Organise and Collective Bargaining Convention 1949 (No 98).

A. NEW LEGISLATION ON TRADE UNION ORGANISATIONS AND
COLLECTIVE BARGAINING

292. On 29 June 1979 the Government published several legislative decrees concerning trade unions rights and the right to collective bargaining, in particular Legislative Decrees Nos. 2756 and 2758 of which the Committee took note

at its November 1979 Session. At that time, the Committee made comments on these texts, particularly on the following points: formation of trade unions, acquisition of legal personality, trade unions by-laws, conditions of eligibility of leaders, supervision of trade unions funds, prohibition of intervention in partisan political activities, setting up of federations and confederations, trade union rights of public officials, field of application and level of collective bargaining, and the right to strike.

293. In these circumstances, the Governing Body, on the Committee's recommendation, decided:

- (i) to note with satisfaction the abrogation of Legislative Decree No 198 which had been adopted in December 1973 and which imposed serious restrictions on trade union activities;
- (ii) to note that the promulgation of the legislative decrees on trade union organisations and collective bargaining constituted an important first step in the application of the recommendations of the Fact-Finding and Conciliation Commission;
- (iii) to draw the Government's attention to the principles and considerations expressed by the Committee in relation to certain provisions of this legislation which are incompatible with the principles of freedom of association and collective bargaining with a view to introducing the necessary amendments;
- (iv) to express the hope that the legislation will be thus applied in a spirit conforming to the principles of freedom of association and with respect for civil rights, the importance of which had been stressed by the Fact-Finding and Conciliation Commission;
- (v) to request the Government to forward information on the implementation of the recommendations mentioned in subparagraph (iii) above and to continue to supply information on the practical application of the legislative decrees.

294. In its communication dated 20 February 1980, the Government states that certain technical amendments have been made to the legislation on trade union organisations and collective bargaining by legislative Decree No 2950, published in the Official Journal on 21 November 1979. The amendments

to Legislative Decree № 2758 concerning collective bargaining include the introduction of details on matters to be governed by collective agreements, the grant of the right to negotiate to trade union management, the elimination of the necessity of having legal personality to administer welfare schemes. In addition, for one year after the entry into force of the Legislative Decree, all previously existing trade unions are entitled to bargain collectively even if the number of their members or the percentage of workers they represent in the undertaking is less than that required by the law. The determination of the minimum percentage of workers necessary for collective bargaining is also amended. This percentage is now fixed in relation to the total number of workers who are the subject of the negotiations, and no longer with regard to the total number of wage earners in the undertaking.

295. In both its communications of 20 February and 22 April 1980, the Government supplies various statistical information concerning concluded collective agreements, strikes that have been called and trade union organisations that have been set up. In the light of this information, it therefore appears that between 16 August 1979 and 31 March 1980, workers have presented 1,931 draft collective agreements and 1,753 new agreements have been signed. From 1 October 1979 to 31 March 1980, 54 strikes concerning more than 20,000 workers and of an average length of 17,6 days have been recorded. The only recourse to compulsory arbitration occurred at the National Electricity undertaking. During the last 9 months, more than 400 trade unions, and one confederation covering 18 trade unions and 2 federations, have been set up.

296. In its communication of 19 May 1980, the Government states that Legislative Decree № 3355 introducing some amendments to the labour legislation was adopted on 1 May 1980. It mainly deals with technical changes in this regard the provisions on special contributions which can be collected under the check-off system, the facilities granted to trade union leaders, the extension of trade union rights in agriculture, staff delegates, collective bargaining and employer organisations.

297. The Government also states that regarding the setting up and supervision of trade unions, measures have been adopted with a view to limiting the role previously given to administrative bodies of the State. In fact, from now on there is a possibility of appeal before the courts as regards faults in the establishment of trade unions as found by the Labour Inspectorate. Moreover, the powers of the Labour Direction with regard to supervision have been limited. The Labour Direction no longer has the possibility to freeze current accounts, and in the case of irregularities constituting crimes, it must bring a complaint before the courts.

298. The Committee notes the information supplied by the Government regarding the application of the new legislation as well as the amendments made to the Legislative Decrees promulgated in June 1979. In particular, it notes with interest that certain amendments introduce the possibility of judicial appeal against administrative decisions, as regards the establishment of trade unions. However, the Committee must note with regret that most of the provisions concerning the points recalled in paragraph 292 above regarding which it made comments when it examined the legislation, have not yet been amended. It expresses the firm hope that the necessary amendments will be introduced in the near future in light of the principles of freedom of association and the recommendations made by the Committee. Moreover, the Committees would like to ask the Government to keep it informed of any development in the matter.

B. DISMISSAL OF A TRADE UNION LEADER

299. At its previous sessions, the Committee examined the allegations concerning the dismissal on 8 March 1979 of Daniel Lillo, President of the National Association of Customs Employees of Valparaiso. This measure was taken by the Regional Governor (Intendente) of the Valparaiso region in accordance with Legislative Decree No 349 of 1974. This Legislative decree empowers intendentes and governors to demand the resignation of members of the executive committees of certain types of associations, in particular of workers' organisations in the public sector, on the ground of serious impediments to the functioning of that organisations, and to appoint replacements. If the person concerned does not resign within the stated time limited, the intendente or governor issues a decree removing the person concerned from his position as a leader of the organisation. In the present case, the Government claims that Mr. Lillo had given to the press a false account of a meeting which he had not attended. The Government stated later that Mr. Lillo had been temporarily suspended from his employment.

300. At its November 1979 Session the Governing Body, on the Committee's recommendation, had drawn the Government's attention to certain principles concerning the importance of protection against acts of anti-union discrimination and had asked it to indicate whether Legislative Decree No 349 had been repealed as far as workers' organisations in the public sector were concerned.

301. In its communication of 16 May 1980, the Government states that various government bodies are presently studying the reform of the law on public officers. The new legislation which establish a definitive system of association of state employees will replace the interim standards contained in Legislative Decree No 349. The Government adds that its philosophy is against interference by the authorities in the associations, and aims at reaffirming their liberty and autonomy.

302. It appears from the information supplied by the Government that Legislative Decree No 349, in pursuance of which Daniel Lillo was removed from office, is still in force. Consequently, the Committee must recall that the provisions of this Legislative Decree allowing removal of leaders from association of public sector workers by administrative authorities are not in conformity with the principles of freedom of association. It must urge that these provisions be repealed. In addition, the Committee hopes that the legislation concerning organisations of workers in the public sector which is presently under study will repeal the provisions in question, and, more generally, that it will accord trade union rights to public officers.

C. DISSOLUTION OF TRADE UNION ORGANISATIONS

(a) Organisations dissolved in October 1978

303. Allegations have also been put forward concerning the dissolution by the Government of seven trade union organisation in October 1978. According to the Government, the conduct of the organisations thus dissolved showed that their methods of action and objectives coincided with the principles and aims of Marxist doctrine. The organisations in question lodged a constitutional appeal for protection before the Santiago Court of Appeal, which dismissed them in the first instance. This decision was confirmed for procedural reasons by a decision of the Supreme Court concerning four of these organisations. The cases concerning the three other organisations were still under way. At its November 1979 Session, the Governing Body, on the Committee's recommendation, asked the Government to furnish information on the results of the appeals which were still under way.

304. In its communication of 22 April 1980, the Government states that the Santiago Court of Appeal has rejected the appeal brought by the United Federation of Peasants and Workers. This decision has been confirmed, for procedural reasons, by the Supreme Court. The Government adds that those entitled to the assets of this organisations have not yet been named. Nevertheless, these assets are, for the moment, under the protection of the State, in the person of the Minister of Public Property. According to the Government, the persons who were members of this organisation have full freedom to set up organisations of their own choosing. Lastly, the Government states that the appeal of the National Union of Textile and Clothing Workers is still pending.

305. The Committee notes that the Supreme Court has rejected, for procedural reasons, the appeal brought by the United Federation of Peasants and Workers. In these circumstances, the dissolution of the seven organisations in question is not in conformity with the principle according to which workers' organisations must not be dissolved by administrative authority.

The Committee also points out in this regard, as it did in its previous report on this case, that the new trade union legislation (Legislative Decree No 2756, section 54) provides that dissolution of trade unions shall take place by judicial order. Regarding the assets and funds of the dissolved organisations, the Committee considers that they must eventually be distributed between the members of the organisations or transferred to the organisations which succeed them.

(b) New allegations

306. In a document of the external committee of the Sole Central of Chilean Workers, annexed to the Communications of the WFTU and the ICFTU dated 11 and 23 April 1980, it is mentioned that the Supreme Court has dissolved the trade union of the Santiago Union Club on the grounds that a trade union cannot exist in an institution which does not exist for profit-making purposes. The Government has not yet supplied its observations on this allegation.

D. DISMISSAL OF TRADE UNIONISTS

307. In its communication of 17 January 1980, the ICFTU refers to violations of trade union rights said to have been committed by the Chilean authorities against four workers of the Copper Company of Chile (CODELCO), a division of El Teniente. The ICFTU appended to its letter a communication from the National Group for Defence of Trade Union Rights.

308. It is stated in this communication that four workers of the CODELCO undertaking, a division of El Teniente, were elected members of the Financial Control Commission of the industrial union of Rancagua. This election took place following a vote of censure against the former commission which was guilty, along with the present trade union leadership, of embezzlement of trade union funds.

309. The communication states that the new commission has successfully carried out a detailed study which has permitted the discovery of illegal manoeuvres by the trade union leadership with the agreement, the collusion or the indifference of state bodies.

310. The communication also states that the present trade union leadership has obstructed the activities of the Financial Control Commission although the former has the sole responsibility for the illegal and unconstitutional management of these funds. The complicity of state officials is explained, according to the communication, by political reasons. It is added that the trade union leaders who are responsible for this situation are in favour of the Government, which protects them.

In spite of pressure and threats the members of the Control Commission continued their investigations.

311. This provoked reactions from the Government and from the public undertaking CODELCO, which on 2 October 1979 dismissed the four members of the Commission. The undertaking based these measures on section 10 of Act. No 16455, which concerns dismissals for reasons connected with the functioning of the undertaking replied to requests for explanations that there had been "orders from above". It is stated in the communication that in this manner, the Government of Chile, acting both as public authority and as employer, intervened to the prejudice of members of the union, and interfered in purely trade union questions.

312. The documentation sent by the WFTU and the ICFTU on 11 and 23 April 1980 also mentions measures of dismissal taken against leaders of various trade union organisations: the Industrial Trade Union of Copper Mines in Chuquicamata, the Post and Telegraph Association of Concepcion and the Textile Workers' Union "Andina". Moreover, 52 workers of the CTI undertaking are said to have been dismissed as a reprisal following a 17-day legal strike held in December 1979.

313. In its communication of 22 April 1980, the Government refers to the dismissal of workers who were said to be elected members of the Financial Control Commission of the industrial union of Rancagua (CODELCO), a division of El Teniente. The government explains that these persons put forward their nomination to this commission during a meeting of the union held on 20 March 1979. However, in the minutes of the meeting there is no trace of their election. Nevertheless they assumed these functions in actual fact, and requested from the works management control of the accounts of the union. In the end, after a complaint against the control of the accounts of the union. In the end, after a complaint against the union, the works management had to put the case before the competent criminal judge. In addition, the workers concerned have brought the question of dismissal before the tribunals, which have not yet handed down their judgement.

314. Generally, the Committee considers it desirable to recall at the present time, due to the large number of allegations concerning the dismissal of trade unionists, the importance which it attaches to effective protection against acts of anti-union discrimination. It notes that the dismissal which took place at CODELCO, a division of El Teniente, are subject to judicial proceedings, and it would accordingly like to be kept informed of the outcome. The Committee would also like to have the Government's observations on the new allegations of dismissals mentioned above.

E. CIVIL LIBERTIES CONNECTED WITH THE EXERCISE OF
TRADE UNION RIGHTS

315. At various stages in the examination of the case, the Committee has examined allegations concerning the detention and disappearance of trade unionists or former trade unionists. In a report examined by the Committee in November 1978, the Government gave information concerning 24 out of 67 persons mentioned in the list drawn up by the Committee in its 177th Report. In March 1979, the Government pointed out that the Santiago Court of Appeal had delegated one of its judges to discharge the special mission of considering the cases of those persons presumed to have disappeared while on trial before one of the tribunals of the Santiago Court of Appeal district. These cases concerned 36 of the persons mentioned in the complaints.

316. In a communication of October 1979, the ICFTU stated that 18 corpses bearing signs of torture had been discovered near the Yunbel cemetery. According to statements of the inhabitants of this area, the bodies had been buried at the end of October 1975. A large deployment of military forces and police had been seen at the time in the area. The ICFTU stated that two of the bodies had been identified as trade union leaders from the paper industry at Laja.

317. At its November 1979 Session, the Governing Body, on the Committee's recommendation, asked the Government to continue to supply information on the outcome of the proceedings under way and, in general, on the persons mentioned in the list drawn up by the Committee in its 177th Report, and to provide its observations on the ICFTU new allegations.

318. In various communications several complainant organisations refer to repression against seven leaders of trade union federations whose indictment the Government had requested through the Ministry of the Interior. These leaders had, in the names of their organisations, stated in writing that the competent authorities should return to their relatives the bodies of the persons found at Lonquén.

319. In the communication of 6 November 1979 the Trade Unions International of Agricultural, Forestry and Plantation Workers gives details of this affair. It explains that the bodies of 15 peasants who were members of the Confederation "Ranquil" had been found last year in an abandoned lime-kiln, at Lonquén, close to Santiago. According to the complainant organisation, the eight policemen guilty of these murders had benefited from the amnesty law and are at liberty. It adds that the bodies have been buried in a common grave instead of being returned to their relatives. The seven trade union leaders had then addressed a letter to the Minister of the Interior concerning this case. The complainant organisation states that the

Ministry of the Interior's request for indictment of these persons was rejected by the investigating judge. The UISTAPP adds that on 15 September 1979 the police arrested 35 persons accused of disturbing public order, following a mass celebrated in the Santiago cathedral in memory of the 15 assassinated peasants.

320. The Trade Unions International of Textile, Clothing, Leather and Fur Workers alleges in its letter of 14 February 1980 that one of the seven arrested leaders, Fernando Bobadilla President of the National Federation of Textile and Clothing Workers, was sentenced on 25 January 1980 to 541 days' imprisonment.

321. In its communication of 7 January 1980, the ICFTU mentions the arrest of Victor Muñoz, a leader of the trade union "Textile Sumar", This person is said to have been accused of "extra-union activities" contrary to the law.

322. In its communications of 14 and 18 March 1980, the ICFTU states that it has also been informed that the celebration of Women's International Day organised on 8 March 1980 by the National Trade Union Co-ordination was violently put down by the authorities. According to the complainant organisation, the police made more than 140 arrests in Santiago and Valparaiso. Those arrested are said to be kept in secret not in the usual places of detention or have been placed under house arrest in areas known to be the least comfortable. The ICFTU supplies a list of 12 persons so dealt with by a decision of the Minister of the Interior made under Legislative Decree No 3518.

323. The allegations made by the external committee of the Sole Central of Chilean Workers in the document sent by the WFTU and the ICFTU also mentions the arrest of three workers of the Good Year company in Santiago during a peaceful demonstration organised when a dispute was going on in the undertaking.

324. Numerous communications from complainant organisations concern the arrest of trade union leaders accused of organising demonstrations for May Day. The complainants give the following names: Humberto Vergara, Hernan Navarro, Alfonso Hernández, Carlos Ulloa, Carlos Morales (leader of the United Federation of Peasants and Workers) and Juan Jara (president of the Taxi Trade Union).

325. In this regard, the ICFTU explains in its letter of 23 April 1980 that only government-organised celebrations for May Day had been authorised. The WCL alleges that police intervention during a demonstration organised by the Workers' Unitary Front on May Day caused four serious fire-arm woundings and the arrest of 57 workers. In addition, the ICFTU alleges

that 37 workers were sentenced of 6 May last for having provoked disorder and for having incited violence by distributing pamphlets and by organising a demonstration on May Day in the north of the country. Lastly, the ICFTU in its communication of 21 May 1980 refers to the arrest of Adolfo Poblete Calderon in the Talca region.

326. In its reply of 22 April 1980, the Government states that regarding the seven trade union leaders arrested following their inquiries regarding the discovery of the bodies at Lonquén, the Minister of the Interior transmitted the case to the Santiago Court Appeal so that it should decide whether those concerned had, in fact, committed a crime under the law. The Tribunal considered that there were sufficient reasons as regards two of them, Fernando Bobadilla and Alamiro Guzmán. The others were set free. On 24 January 1980, the Public Prosecutor requested a prison sentence for the two concerned for having acted as agents of other persons without possessing the legal personality to do so. The Government points out that the reasons behind the legal proceedings are not linked to trade union activities.

327. Regarding Victor Manuel Muñoz Espinoza, who as mentioned in an ICFTU communication, the Government states that he was arrested on 17 December 1979 for having distributed subversive pamphlets in a public place and for having in his possession a false identified card. The investigating magistrate of the Court of Santiago considered that there were grounds to convict, and ordered his imprisonment. The defence lawyer did not request provisional release. Recently, the Public Prosecutor again requested a prison sentence. Regarding the ICFTU allegation, the Government states that Victor Manuel Muñoz is not amongst the leaders of the 11 trade unions at the Sumar S.A. undertaking.

328. Regarding the disturbances which took place during the celebrations for Women's International Day, the Government explains that about 40 persons demonstrated in a non-authorised public place and provoked disturbances, defying the police who were controlling the traffic and causing violations of public and private property. A total of 18 men and 8 women were arrested, 10 of whom were students, 7 workers, 6 mothers of families and 2 of no known occupation. All the women were set free after 30 minutes as were 10 other persons. Eight persons were placed under house arrest in the environs of Valparaíso with freedom of movement within the city.

329. As for the events which took place on May Day, the Government points out that Carlos Morales, Alfonso Hernandez and Herman Navarro were arrested for having provoked disorder in a public place paralysing vehicular traffic. They were set

free the same day. One of the persons mentioned by the complainants, namely Juan Jara, was brought before the Santiago court on charges of defamation and libel. He has been free on bail since 17 April, and, if he is convicted, he may be granted a conditional suspension of his sentence.

330. As regards Adolfo Poblete Calderon, the Government state that this person was arrested on 14 May 1980 and was immediately brought before the Talca courts. He is accused of having infringed the provisions of the Act on internal security of the State. He has not been held in secret and he has chosen a defence lawyer.

331. The Committee notes with concern that, since it last examined this case in November 1979, it has received numerous complaints regarding the arrest of trade union leaders and militants. In its reply, the Government supplies information on seven of the leaders listed by the complainants, whose arrests, the Government claims, were not linked to trade union activities. It appears from the information that four of them were brought before the courts, and that the three others, who were arrested on May Day, were released that same day.

332. In this connection, the Committee wishes to recall that in numerous cases where the complainants allege that workers or trade union leaders have been arrested because of their trade union activities, and where the government's replies simply deny the allegations or claim that the arrests were made for subversive activities, for reasons of internal security or for crimes under ordinary law, the Committee has always followed the rule that the governments concerned should be requested to submit further information as precise as possible concerning the arrests, particularly in connection with the legal or judicial proceedings instituted as a result thereof and the result of such proceedings in order to be able to make a proper examination of the allegation. The Committee accordingly would like to receive detailed information on the results of the judicial proceedings undertaken against these four persons.

333. The Committee notes the information supplied by the Government on the demonstrations organised on Women's International Day. In particular, it notes that the persons arrested were released but that eight of them have been placed under house arrest. It appears that these measures were taken by the administrative authorities. In this connection, the Committee wishes to recall the importance which it attaches to the right of all accused persons to enjoy the benefits of normal judicial procedures. In these circumstances, the Committee considers that the persons arrested during a demonstration organised by a trade union, such as the one which is the subject of the allegations, should be released or, if they are accused of crimes, be judged by independent and impartial courts.

334. As regards the arrests which took place on May Day, the Committee wishes to point out as it has done on several occasions and particularly in connection with this case that the right to organise public meetings and processions on May Day constitutes an important aspect of trade union rights, provided the legal provisions on public order are observed.

335. Lastly, the Committee notes that the Government has not yet sent its observations on the allegations concerning the discovery of the bodies of two trade union leaders near Yumbel, the arrests which took place during a demonstration by the workers of the Good Year Company, as well as on the incidents which took place on May Day and the sentencing of workers in the north of the country. The Committee finally notes that the Government has not supplied new information since May 1979 concerning the inquiries undertaken as regards the disappearances of trade unionists or former trade unionists.

336. In these circumstances, the Committee recommends the Governing Body:

- (a) as regards the new trade union legislation,
 - (i) to note the information supplied by the Government regarding the application of the new legislation as well as the amendments made to the Legislative Decrees promulgated on June 1979;
 - (ii) to note, in particular, with interest that certain amendments introduce the possibility of judicial appeal against administrative decisions, as regards the establishment of trade unions;
 - (iii) to note with regret that most of the provisions which gave rise to comments by the Committee have not yet been amended;
 - (iv) to express the firm hope that the necessary amendments will be introduced in the near future in light of the principles of freedom of association and the recommendations made by the Committee in its 1977 Report;
 - (v) to ask the Government to keep the Committee informed of any development in the matter;
- (b) regarding the removal from office of Mr. Daniel Lillo,
 - (i) to point out that the provisions of Legislative Decree No 34 are not in conformity with the principles of freedom of association and to urge that these provisions be repealed;

- (ii) to express the firm hope that the legislation relating to organisations of workers in the public sector which is presently under study will accord trade union rights to this category of workers;
- (c) as regards the dissolution of trade union organisations,
- (i) to point out that the procedure followed for the dissolution of seven organisations in October 1978 is not in conformity with the principle according to which workers' organisations must not be dissolved by administrative authority and to draw the attention of the Government to the principle expressed in paragraph 305 above concerning the devolution of the assets of the dissolved organisations;
 - (ii) to ask the Government to supply its observations on the dissolution of the trade union of the Santiago Union Club;
- (d) as regards the dismissal of trade unionists, to ask the Government to supply information on the results of the judicial proceedings brought by the dismissed workers of CODELCO, a division of El Teniente, as well as in the new allegations listed in paragraph 312 above;
- (e) regarding the allegations concerning civil liberties,
- (i) to express its concern over the number of allegations relating to the arrest of trade union leaders and militants;
 - (ii) to ask the Government to supply its observation on the allegations mentioned in paragraphs 323 to 325 above, and, in particular, on any current judicial proceedings, especial concerning the cases of Mr. Fernando Bobadilla, Alamiro Guzman, Victor Muñoz and Juan Jara;
 - (iii) also to ask the Government to supply its observation on the allegations made by the ICFTU in October 1979 (see paragraph 316 above) and information on the persons who the complainants allege to have disappeared or be detained and whose names appear in the Annex;
 - (iv) to draw the attention of the Government to the considerations set out in paragraphs 333 and 334 above concerning the arrest made during demonstration organised on Women's International Day and May Day;
- (f) to take note of this interim report.

ANNEX

Person in respect of whom the Government had been
requested for additional information

Araya Zuleta, Bernardo ₁	A former CUT official.
Atencio Cortes, Vicente ₂	A workers' leader.
Baeza Cruces, José	A former member of the CUT National Executive Council for Youth.
Barria A. Pedro, Abel ₃	Leader of the CUT national Execu- tive Council for Youth, Valdivia
Berrios Cataldo, Lincoyán ₁	An official of the National Association of Municipal Employees.
Cáceres González, Jorge	A trade union official
Castillo Tapia, Gabriel	A former official of the Nitrate Workers' Union
Cepeda Marinkovic, Horacio ₁	A trade union official
Cerda Cuevas, Cesar ₂	A former peasants' leader
Contreras Maluje, Carlos ₃	A member of the Single National Union of Chemical and Pharma- ceutical Laboratory Workers
Contreras Rojas, Héctor ₂	Former President of the Radio Portales Supervisors' Union
Corvalán Valencia, José ₃	A former union president, muni- cipality of Santiago
Cortés Alruiz, Juan ₃	A trade union official, National Health Service, San Juan de Dios Hospital
Cruz Diaz, Lisandro ₁	A trade union official.
Diaz López, Victor ₂	A former CUT official.
Diaz Silva, Lenin ₂	A trade union official at the "La Exótica" Mines.
Donaire Cortés, Uldarico ₃	A former official of the Horizon- te Printing Works Union.

Donato Avendaño, Jaime 2	A National electricity workers' leader.
Fuentes Rodriguez, Humberto 3	An official of the Building Workers' Federation
Fuica, Vega, Mario	A former leader of the municipal workers of Renca.
Galvez Rivadeneira, Guillermo 3	Secretary of the Book Trade Workers' Union, Quimantu
Gianelli Company, Juan 3	A SUTE national leader.
Lara Rojas, Fernando 3	A national textile workers' leader.
Lazo Santander, Luis 1	A former official of the Electricity Company Employees' Federation
López, Patricio	Supervisor of the Textile Workers' Federation at Tomeard Santiago
Léon Muñoz, Gabriel 2	An official of the Talcahuano Newsvendors' Union.
López Suárez, Nicolás	A former CUT national official; the Government had stated that he was at liberty, but the WFTU subsequently claimed that he had disappeared.
Lorca Tobar, Carlos 3	A workers' leader.
Macaya Molina, Victor	Secretary of the Oveja Tomé Textile Workers' Union
Martinez Quijón, Guillermo 3	An official of the Book Trade Workers' Union.
Miranda Godoy, Dario	A member of the Metalworkers' Federation.
Montoya Vilches, Raúl	An official of the Building Workers' Federation; the Government had stated that he was at liberty and had applied for a passport to go to Peru.
Moraga Garcés, Juan 3	A member of the Building Workers' Federation

Morales Ramirez, Miguel 3	President of the Itinerant Traders' Union.
Navarro Allende, Fernando 3	A railwaymen's leader.
Nazar Quiroz, Miguel 3	A CUT official.
NGñez Benavides, Rodolfo 3	Organisational Secretary of the CEPCH
Orellana Catalán, Juan	A former official of the Ranquil Confederation.
Ortiz Letelier, Fernando	An official of the APEUCH.
Palma Muñoz, José	Former President of the ENDESA Employees' Union.
Pereira Plaza, Reinalda 1	A trade Union official
Pinto Arroyo, Edras 1	A trade union official.
Pizarro Molino, Waldo 3	A textile workers' leader.
Ponce Vicencio, Exequiel 1	Former General Secretary of the Chilean Port Workers' Federation the Government had stated that he had gone underground and was being sought.
Portilla Portilla, Armando 1	A textile workers' leader,
Recabarren González, Luis 3	A former trade union official at the State Technical University
Recabarren Rojas, Manuel 3	An official of the Printing Workers' Union.
Ságredo Pacheco, José 3	An official of the Building Workers' Federation
Riquelme Pino, Anibal 3	Former President of the Gas, Heating and Sanitation Workers' Union of Santiago.

Salgado Salinas, Jorge 3	A peasants' union Leader.
Santander Miranda, José 3	A former trade union official
Santos Guerra, José	Secretary of the Book Trade Workers' Union.
Silva Bustos, Pedro 3	Former Vice-President of the National Association of Municipal Employees.
Solovera Gallardo, Jorge 3	A member of the Metalworkers' Federation
Tolosa Vásquez, José 3	An official of the Book Trade Workers' Union.
Vásquez, Rolando	A CUT national leader.
Vega Ramirez, Luis	Vice-President of the Ranquil Confederation.
Vega Vega, Julio 3	An official of the Municipal Workers' Union; the Government had furnished information concerning a person named Julio Vega Pais.
Veliz Ramirez, Héctor	Municipal Workers' Delegate to the CUT.
Villagran Rojas, José	Secretary to the Building Workers' Federation.
Vizcarra Cofré, Carlos 3	An official of the FIAT industrial Union of Santiago.
Weibel Navarrete, José 3	A former leader of the employees of San José Hospital, Santiago.
Weibel, Ricardo 3	
Zamorano Donoso, Mario 2	A former official of the Leather and Footwear Workers' Federation.

1. The Government had stated that these persons had left the country.

2.- The Government had stated that these persons had not been arrested.

3.- The Government had stated that an inquiry was being carried out into the disappearance of these persons.

